

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales

Carrera de Derecho

Interdependencia entre el ejercicio del Derecho a la Ciudad y el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Consulta Popular por el Agua, en el cantón Cuenca.


Trabajo de titulación previa a la obtención del título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales

Autor:

Julio Esteban Díaz Torres

Director:

Marlon Tiberio Torres Rodas

ORCID:  0000-0003-2247-9035

Cuenca, Ecuador

2023-06-16

Resumen

Esta investigación examina la interdependencia entre ciudad y naturaleza, y cómo esta se manifiesta en la participación ciudadana y la defensa de los derechos colectivos. Se centra específicamente en la relación entre defensa de los Derechos de la Naturaleza y ejercicio del Derecho a la Ciudad en el contexto de la Consulta Popular por el Agua. Se exploran el Derecho a la Ciudad y Derechos de la Naturaleza, así como su reconocimiento en la legislación ecuatoriana. También se analiza la relevancia de la participación ciudadana en la defensa de derechos, así como su dimensión institucional y no institucional. Se revisa la Consulta Popular por el Agua, incluyendo su dictamen de constitucionalidad, preguntas y resultados, y se recopilan las perspectivas de líderes sociales, representantes y académicos. En este sentido, se destacan las tensiones sociales, políticas y económicas al respecto y evidencia la relación entre el Derecho a la Ciudad con la defensa de los Derechos de la Naturaleza y la lucha contra el extractivismo.

Palabras clave: derecho constitucional ambiental, derechos colectivos, participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana, ciudad y extractivismo

Abstract

This research examines the interdependence between the city and nature and how it manifests in citizen participation and the defense of collective rights. It specifically focuses on the relationship between the defense of Rights of Nature and the exercise of the Right to the City in the context of the Popular Consultation for Water. The study explores the Right to the City and Rights of Nature, as well as their recognition in Ecuadorian legislation. It also analyzes the relevance of citizen participation in the defense of rights, considering both institutional and non-institutional dimensions. The Popular Consultation for Water is reviewed, including its constitutional assessment, questions, and results, while collecting perspectives from social leaders, representatives, and academics. The research highlights the social, political, and economic tensions involved, demonstrating the connection between the Right to the City, the defense of Rights of Nature, and the fight against extractivism.

Keywords: Environmental constitutional law, collective rights, citizen participation, mechanisms of citizen participation, city and extractivism.

Índice

Resumen.....	1
Abstract.....	2
Índice.....	3
Dedicatoria.....	5
Agradecimiento	6
Capítulo I.....	7
Descripción del Problema de Estudio	7
1.1. Contexto de Investigación.....	7
1.2. Problema de Investigación.....	9
1.3. Objetivos de Investigación.....	12
1.3.1. Objetivo General.....	12
1.3.2. Objetivos Específicos.....	12
1.4. Pregunta de Investigación	12
1.5. Justificación del Problema	13
1.6. Metodologías de Investigación.....	14
Capítulo II.....	15
Ciudad y naturaleza como organismos políticos e interdependientes	15
2.1. Ciudad como producto social y político	15
2.2. Derecho a la Ciudad.....	20
2.3. Derecho a la Ciudad en Ecuador	24
2.4. Derechos de la Naturaleza	26
2.5. Interdependencia entre ciudad y naturaleza	39
CAPÍTULO III	47
Mecanismos de Participación Ciudadana en la Defensa de Derechos Relativos a la Naturaleza y el Territorio.....	47
3.1. Democracia y Participación Ciudadana.....	47
3.2. Mecanismos Institucionales y No Institucionales de Participación.....	56
3.3. Mecanismos e Instancias de Participación en la Legislación Ecuatoriana	61
3.4. Consulta Popular.....	66
3.5. Participación Ciudadana en la Defensa de Derechos Relativos a la Naturaleza y el Territorio.....	70
CAPÍTULO IV	80

Consulta Popular por el Agua en Cuenca.....	80
4.1. Proyecto de Consulta Popular	80
4.2. Discursos y Disputas.....	87
4.3. Participación Ciudadana, Derecho a la Ciudad y Defensa de la Naturaleza	96
Conclusiones.....	105
Recomendaciones.....	107
Referencias bibliográficas.....	108
Referencias Normativas.....	124
Jurisprudencia	125

Dedicatoria

A Ximena, Pablo y Andrea.

Agradecimiento

A mis padres y hermana que con amor, ternura y atención han sido respaldo, motivación y un espacio seguro.

A Caty Díaz, quien ha sido apoyo y referente a lo largo de mi vida.

A David Fajardo y Ana Elisa Astudillo por sus aportes para el desarrollo de esta investigación.

A Yasunidos, Cabildo por el Agua y líderes comunitarios que localmente han interpelado en la defensa de derechos colectivos.

Capítulo I

Descripción del Problema de Estudio

1.1. Contexto de Investigación

Durante las últimas décadas el concepto Derecho a la Ciudad ha tomado relevancia en el debate académico, legislativo y ciudadano dando paso a replantear las formas de pensar y habitar la ciudad. En el contexto ecuatoriano, el reconocimiento del Derecho a la Ciudad en la Constitución de Montecristi generó gran expectativa al considerar entre otros, el principio de sustentabilidad, equilibrio entre lo urbano y rural, así como la función social y ambiental de la propiedad. Pese a esto, la investigación realizada por Martínez Moscoso y col. (2019), concluye que el Derecho a la Ciudad ha quedado como un principio al que se debe darle contenido, pues en la normativa nacional y local, no existe claridad del concepto por parte de los actores políticos (p.82).

En cuanto a los Derechos de la Naturaleza, su reconocimiento en la constitución de 2008 representó un cambio significativo en la relación hombre y naturaleza, pues esta deja de ser considerada un bien y objeto de relación jurídica, o sea, un simple depósito de mercaderías, para volverse sujeto de derechos (Maluf et al., 2017, p.168). Sin embargo, la política minera 2019-2030 ha reafirmado la apuesta al desarrollo económico con políticas públicas que incrementen y diversifiquen la producción del sector minero (ARCOM, 2019). En este escenario, se ha evidenciado la presión sobre diversos ecosistemas estratégicos como las cabeceras de cuencas, la selva amazónica, páramos, lagunas alto andinas, entre otros (OCMAL, 2014 citado en Carvajal, 2016, p.9). Como parte de esto, diversos aportes académicos han señalado la entrada del extractivismo minero junto con diversas formas de despojo y resistencia manifestadas sobre el territorio (Sánchez Albarrán, 2017, p.19).

En este contexto, los derechos sustantivos al territorio y a la libre determinación han sido eje de reivindicaciones políticas y jurídicas (Gasparello, 2020, p.137) asimismo, la protección del agua, la tierra y el territorio, el centro de protección de las luchas contra la devastación ambiental, el despojo y mercantilización de bienes comunes (Carvajal, 2016, p.45). Tomando en consideración al espacio urbano y espacio rural como caras de una misma moneda (Hernández et al., 2020, p.441), la articulación campo-ciudad, ha demostrado tener un peso importante para detener los planes de empresas transnacionales gigantes (Torres, 2018, p.13). En esta línea, nuevas lecturas del Derecho a la Ciudad se han referido al derecho socio ambiental a la ciudad como el que forcejea en lo rural y en lo urbano por territorios interétnicos que no estén desarmonizados socio ambientalmente. Es un derecho que entiende a la naturaleza globalmente, con sus facetas, contradicciones y particulares (Hernández et al., 2020, p.465).

En el contexto colombiano, múltiples comunidades han exigido la realización de Consultas Populares para pronunciarse frente al desarrollo de proyectos mega mineros en sus municipios y regiones, configurando un nuevo ciclo de movilización por la expansión de derechos políticos asociados a la democracia local (Hincapié, 2017, p. 96). Así, las consultas populares han mostrado tener gran impacto en el ámbito político ya que tienen el potencial de movilizar una parte de la población, incidir en la agenda política y las reglas institucionales, y abrir nuevos espacios de debate y participación democrática. (Dietz, 2018).

Diversas expresiones de resistencia, organización y participación han buscado incidir en el reconocimiento de derechos relativos a la naturaleza y el territorio. Dentro de esto, se ha develado la importancia de la participación ciudadana, así como un contexto de narrativas divergentes y tensión social. Al mismo tiempo, importantes

conquistas ambientales han marcado precedentes a nivel jurídico y constitucional, así como a nivel social y político. A partir de esto, es importante dentro de la presente investigación comprender los escenarios y mecanismos de participación, así como la complementariedad entre los mismos.

Como se ha mencionado, dentro del contexto ecuatoriano el Estado ha reafirmado su apuesta por políticas extractivistas comprometiendo derechos colectivos y de la naturaleza. Al mismo tiempo, esto ha provocado resistencias sociales que en algunos casos han logrado frenar, parcialmente, el avance de la frontera minera, sin embargo, la amenaza aún se mantiene (Torres, 2018, p. 12). Respecto al cantón Cuenca, aproximadamente el 70% de los habitantes manifiestan, según encuestas, que uno de los problemas de mayor preocupación es la minería y los riesgos de afectación a las fuentes de agua (Torres, 2018, p.13). Dentro de esto, múltiples manifestaciones y narrativas han puesto en evidencia un escenario de tensiones, acuerdos, y deliberación, un escenario de interdependencia entre el Derecho a la Ciudad y Derechos de la Naturaleza.

1.2. Problema de Investigación

Mediante la Constituyente de Montecristi, Ecuador atravesó una transformación jurídica que buscó sembrar no solo las bases de una nueva institucionalidad sino también determinados valores, contenidos y condiciones sustanciales vinculadas con la realización de la justicia, la igualdad y la dignidad de las personas y la naturaleza (Montaña Pinto, 2011, p. 11). Bajo el nuevo marco constitucional, aspectos como los Derechos de la Naturaleza y Derecho a la Ciudad generaron múltiples aspiraciones y desafíos a nivel institucional y social. No obstante, su cumplimiento se ha visto en controversia no sólo porque el Derecho a la Ciudad ha quedado como un principio al que se debe darle contenido (Martínez-Moscoso et al., 2019, p.82) sino también por

políticas extractivistas en lo ambiental y coercitivas en lo urbano. En medio de esto, la lectura y aplicación interdependiente y complementaria entre los Derechos de la Naturaleza y el Derecho a la Ciudad ha sido escasa pese a sus múltiples puntos de encuentro. En este caso, la consulta popular efectuada en el cantón Cuenca en el año 2021 recoge manifestaciones ciudadanas y políticas que exponen la convergencia e interdependencia de los derechos mencionados. Si bien por regla general los derechos son interdependientes y de igual jerarquía, ¿de qué forma converge el Derecho a la Ciudad y los Derechos de la Naturaleza en lo territorial, social y político?

En la presente investigación se analizará la relación constitucional que existe entre el Derecho a la Ciudad con los Derechos de la Naturaleza tomando como referencia la consulta popular realizada en el cantón Cuenca en el año 2021. En consecuencia, no solo es necesario tener presente el vínculo constitucional entre los derechos mencionados sino también abordar el alcance de la participación ciudadana más allá de lo institucional y formal.

En la actualidad, no existe una investigación de tipo cualitativa que analice la convergencia del Derecho a la Ciudad y Derechos de la Naturaleza tomando como referencia la Consulta Popular por el Agua realizada en la ciudad de Cuenca. Debido a esto, es necesario conocer desde la experiencia del cantón, la convergencia de derechos y principios vinculados a la ciudad y la naturaleza desde lo social, territorial y político. Esta discusión resulta relevante no solo para evidenciar la interdependencia de los derechos sino también para revisar las expresiones institucionales y no institucionales de la participación ciudadana en un contexto donde han incrementado las manifestaciones críticas y organizadas en contra de megaproyectos que atentan a la naturaleza y derechos colectivos.

Tanto en el ámbito nacional como local, pese a sus múltiples puntos de encuentro, ha sido escaso el estudio y análisis de interdependencia entre el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza con el ejercicio del Derecho a la Ciudad. Como se ha mencionado, estos derechos no han sido comprendidos a profundidad por los actores políticos y, tampoco se han abordado teóricamente desde un enfoque interdependiente.

En este caso, la consulta popular efectuada en el cantón Cuenca en el año 2021, al ser un mecanismo de participación ciudadana encaminado a la protección de fuentes hídricas, recoge expresiones ciudadanas y políticas que exponen la convergencia e interdependencia de los derechos mencionados. Dentro de esto, si bien, por regla general los derechos son interdependientes y de igual jerarquía, es necesario reunir criterios que permitan reflexionar sobre su relación en la defensa de derechos relativos a la naturaleza y el territorio. De igual forma, es pertinente discutir la complementariedad y tensión alrededor de las expresiones institucionales y no institucionales de participación que se exponen en lo social, territorial y político.

Para la presente investigación, tomando como referencia la Consulta Popular por el Agua, se encuentra relevante comprender la relación de interdependencia y convergencia que existe entre el Derecho a la Ciudad y los Derechos de la Naturaleza. En la actualidad, no existe una investigación de tipo cualitativa que analice la problemática propuesta por lo que es pertinente estudiar a partir de la experiencia del cantón Cuenca, la convergencia de derechos y principios vinculados a la ciudad, naturaleza y participación ciudadana. Con esto, se busca cooperar al estudio en el ámbito local respecto a la interdependencia de los derechos relativos a la naturaleza y el territorio y su relación con mecanismos de participación ciudadana.

1.3. Objetivos de Investigación

1.3.1. Objetivo General

Analizar la interdependencia entre el ejercicio del Derecho a la Ciudad con el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza en el marco de la Consulta Popular por el Agua llevada a cabo en el cantón Cuenca.

1.3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos de la presente investigación son:

- Analizar la dimensión política y normativa de la interdependencia entre el ejercicio del Derecho a la Ciudad con el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza en la consulta popular llevada a cabo en Cuenca.
- Estudiar la relación del Derecho a la Ciudad en la aplicación de mecanismos de participación ciudadana para la defensa de derechos relativos a la naturaleza y el territorio.
- Distinguir las expresiones institucionales y no institucionales de participación ciudadana manifestadas en la Consulta Popular llevada a cabo en el cantón Cuenca.

1.4. Pregunta de Investigación

¿Cuál es la relación normativa y política entre el ejercicio del Derecho a la Ciudad con el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza manifestada en la Consulta Popular por el Agua del cantón Cuenca?

1.5. Justificación del Problema

Durante las últimas décadas importantes procesos de participación ciudadana y movilización social han puesto como prioridad la defensa de derechos relativos a la naturaleza y el territorio. Dentro de esto, victorias y tensiones han evidenciado un escenario complejo que supera a procesos administrativos o judiciales, y concierne a la ciudadanía, comunidades, medios de comunicación y cámaras de representación.

A partir de esto, la investigación propuesta no solo pondrá en discusión la relación constitucional entre el Derecho a la Ciudad y los Derechos de la Naturaleza, sino que también su interdependencia a nivel material y discursivo dentro del proceso de Consulta Popular por el Agua llevada a cabo en Cuenca. Por otra parte, será de relevancia comprender las manifestaciones de participación institucional y no institucional, así como su interdependencia. De igual forma, la presente investigación pretende generar reflexión en el ámbito local respecto a los procesos y mecanismos de participación ciudadana, así como la corresponsabilidad que guarda la ciudad en la defensa de derechos relativos a la naturaleza y el territorio

Dentro de los impactos académicos la investigación aportará perspectivas relacionadas a la convergencia e interdependencia de derechos en la Consulta Popular por el Agua. De igual forma, es de relevancia el registro de criterios y contribuciones académicas relacionadas al Derecho a la Ciudad en el cantón Cuenca mismas que podrán servir como referente para futuras investigaciones en torno a mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos relativos a la naturaleza y el territorio.

1.6. Metodologías de Investigación

En la presente investigación de carácter no experimental, el objeto de estudio se abordará con el método de análisis-síntesis, descomponiéndolo en sus elementos, estos son, Derecho a la Ciudad, Derechos de la Naturaleza y Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana. Con esto, posteriormente se integrarán los elementos analizados para destacar las relaciones existentes entre las partes y el todo. Dentro del proceso de análisis, se estudiarán conceptos, principios y leyes referentes a la ciudad, naturaleza y participación a la vez que se distinguirá teóricamente las expresiones institucionales y no institucionales de participación ciudadana.

Teniendo en cuenta que existe sustento teórico suficiente, se realizará un abordaje de tipo descriptivo para conocer el componente político de la ciudad, el surgimiento y desarrollo del Derecho a la Ciudad, así como su relación con la naturaleza y sus derechos. En este sentido, se llevará a cabo una revisión documental interdisciplinar para recopilar información de libros, artículos, tesis y trabajos de investigación que analicen categorías como ciudad y naturaleza, espacio público y ciudadanía, mecanismos de participación ciudadana y consulta popular, etc. Por otra parte, a través del método sintético, el presente trabajo analizará la información recolectada respecto al proceso de Consulta Popular para integrar el análisis teórico al objetivo de estudio planteado.

Dentro de las técnicas a ser usadas en la presente investigación, será de gran utilidad la entrevista y el análisis de contenido. Estas técnicas aportarán en la comprensión de las relaciones, tensiones y expresiones dentro del proceso de Consulta Popular. Como parte de este proceso, se entrevistará a líderes sociales y académicos relacionados al objeto de estudio. De igual forma, la observación como

técnica servirá para recoger diversas manifestaciones de participación ciudadana no institucional expresadas en el territorio y durante el proceso de Consulta Popular.

Capítulo II

Ciudad y naturaleza como organismos políticos e interdependientes

2.1. Ciudad como producto social y político

La interdisciplinariedad que atraviesa a la ciudad como categoría de análisis, permite generar lecturas desde diferentes ramas de conocimiento, así como múltiples escalas y enfoques de estudio. En su mayoría, parten de comprender a la ciudad como un núcleo social, administrativo, político y comercial pero que responde fundamentalmente a un contexto modelado por el ser humano. En este sentido, inicialmente se presentará una introducción en torno al origen de las ciudades para posteriormente enfocarnos en la naturaleza social y política que la caracteriza.

Respecto a los orígenes de la ciudad, Enrique Dussel (2007) menciona que hace aproximadamente doce mil años terminó en algunas regiones de la tierra el nomadismo paleolítico caracterizado por recolectores, pescadores y cazadores. A partir de esto, comenzó una vida sedentaria, dentro de determinadas fronteras, conquistadas y protegidas, configurándose procesos de *territorialización* que sirvieron para aplicar las técnicas disciplinarias que exigió la revolución agrícola (Dussel, 2007, p.20). Por otra parte, Salvat Editores (2004) recogen en “La Enciclopedia” que, “desde sus orígenes, hace más de 5.000 años, las ciudades han sido espacios de intercambio comercial, núcleos políticos y centros culturales y religiosos” (p. 3300).

Como resultado de estos procesos, se infiere que, desde sus comienzos, las ciudades han estado íntimamente vinculadas a procesos económicos, sociales y políticos que han sido determinantes en la configuración de su identidad, morfología,

calidad de vida e historia. El historiador israelí Yuval Noah Harari (2013), destaca que el surgimiento de grandes ciudades e imperios fue posible debido a la aparición de relatos comunes de grandes dioses y patrias, los cuales proporcionaban los vínculos sociales necesarios para consolidarse como grupo (p.100).

Asimismo, es de relevancia tomar en cuenta la esencia política del ser humano de la que Aristóteles se refirió en el Libro I de Política al mencionar que, la polis -la ciudad como comunidad política- es una realidad natural y que el ser humano es por naturaleza, un animal político. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas afirmaciones corresponden a un momento histórico-político de jerarquización estamental que no puede ser inobservado. A su vez, esto demanda repensar las actuales limitaciones de la naturaleza política que atraviesan al ser humano en un contexto de reconfiguración tecno-científico y socio-política.

En el marco de lo antes expuesto, es fundamental tener en consideración que, dentro de la tradición occidental, ciudad y política nacieron como conceptos y realidades relacionadas. Etimológicamente, “civitas y polis son las raíces, en distintos idiomas, para expresar, a la vez, un modo de residir y una forma de participar: civismo y política” (Cardoso, 1973). Por su parte, Dussel (2007) considera que, “si lingüísticamente «político» viene de polis en griego y «ciudad» de civitas en latín, conceptualmente lo político propiamente dicho será para mí un campo práctico que supone la «ciudad»” (p.20).

A consideración del filósofo francés Henri Lefebvre (2013), la ciudad es “un espacio creado, modelado y ocupado por actividades sociales en el curso de un tiempo histórico” (p.130). Las ciudades son, “centros de vida social y política donde se acumulan no sólo riquezas, sino conocimientos, técnicas y obras” (Lefebvre, 1968, p.18), es decir, se consolidan como núcleos privilegiados y núcleos de un espacio

político (p.49). En concordancia con esto, Martínez (2013) destaca que el espacio es político-instrumental por lo que, el urbanismo y la ordenación territorial no son un asunto técnico sino principalmente político (p.43). De forma similar, Martínez Lorea (2013) destaca que el urbanismo no trata de modelar el espacio como una obra de arte, sino que modela un espacio político y económico (p.20).

En consecuencia, se considera que los fenómenos urbanos tradicionalmente han estado en construcción y contruidos por un marco social y político, pues, las ciudades son el reflejo de valores simbólicos, memoria colectiva, tensiones y asociaciones entre sus habitantes e instituciones. Al respecto, Cuervo González (2017) considera que, si bien la ciudad se caracteriza por su naturaleza colectiva, esta es definida de maneras distintas, no necesariamente coincidentes (p.43). De igual forma, Lefebvre (1968) señala que la vida urbana implica encuentro, conocimiento, reconocimiento recíproco, enfrentamiento ideológico y político, maneras de vivir y *patterns* que coexisten en la Ciudad (p.31). A partir de esta dimensión ideológica y política, la ciudad también es escenario de tensiones, perspectivas e intereses antagónicos que históricamente se han reflejado en lo material y simbólico.

Por otra parte, entendiendo a la ciudad como creación y creadora, podemos ubicar al Homo Faber o humano creador como ser capaz de construir y modelar las condiciones de su entorno con el uso de la técnica que, a su vez, implica un modelado y construcción de sí mismo. En la actualidad, algo semejante es propuesto por el arquitecto y urbanista danés Jan Gehl (2014) quien desarrolla la tesis según la cual las ciudades son moldeadas por nosotros, pero luego nos moldean ellas (p.9). Es decir, la ciudad como creación es al mismo tiempo productora de nuevas posibilidades que no se limitan únicamente a lo espacial e infraestructuras, sino que repercuten en lo social, económico y político.

Al respecto, Lefebvre (2013) destaca la naturaleza dialéctica del espacio en tanto producto-productor y soporte de relaciones económicas y sociales (p.56). De igual forma, la arquitecta urbanista Marianela Cruz (2016) examina a partir del principio de recursividad propuesto por Edgar Morín, cómo la ciudad es el reflejo de los individuos que la producen y a su vez, esta repercute en el comportamiento de la población que reside y se mueve en ella (p.6). Debido a esto, en la presente investigación es fundamental puntualizar el componente político, ideológico e instrumental del espacio según el cual, el espacio es formado, modelado, a partir de elementos históricos o naturales, pero siempre políticamente (Lefebvre, 1972, p.46).

A partir de lo antes expuesto, se entiende que los modos de construir y habitar la ciudad responden a una matriz cultural, política, tecnológica que a su vez suponen, proponen y estimulan ciertas formas de habitar y construir la ciudad, o sea, ciertos modos de vivir. En consecuencia, las ciudades son un campo en permanente disputa de modelos, voluntades y visiones; debido a esto, para garantizar los intereses ciudadanos, una ciudad debe trascender su espacio físico para convertirse en un lugar donde las personas y la política se junten a demandar y exigir el cumplimiento y ejercicio de sus derechos (Endara, 2016, p.15).

Teniendo en cuenta la relación con la naturaleza dentro del actual modelo de consumo y desarrollo, durante las últimas décadas han tomado gran relevancia discusiones en relación a las responsabilidades y desafíos que las ciudades del siglo XXI recogen. En este sentido, en el seno de organismos internacionales, nacionales o incluso municipales, han nacido objetivos e iniciativas que parten no sólo de reconocer problemas sociales, ambientales y políticos sino inicialmente reconocer una relación de causalidad, la capacidad de injerencia y transformación.

Dentro de esto, ha sido importante reflexionar sobre los actores que integran la ciudad, la corresponsabilidad entre ellos y sus prácticas, sus relaciones con la naturaleza, así como los espacios de participación y deliberación que ofrece una ciudad y sus instituciones. En esta línea, durante las últimas décadas se ha reafirmado que la planificación urbana debe ir más allá de técnicas y aplicaciones parciales (regulación y administración de espacio construido) para convertirse en una práctica social que concierne e interesa a toda la sociedad (Lefebvre, 1968). En consecuencia con lo antes mencionado, Sudjic (2017) destaca que actualmente, en términos materiales una ciudad se puede definir por la manera en que su gente se une para vivir y trabajar, por su modo de gobierno, por su sistema de transportes y por el funcionamiento de su alcantarillado (p.12).

Hoy más que nunca, la ciudad “es reconocida como un fenómeno, un hecho colectivo, social por naturaleza” (Cuervo González, 2017, p. 43). Como:

Una institución, un objeto humano producto de la urbanización, que dependiendo de cómo es construida, gobernada, planeada y gestionada, puede ser un elemento de vital importancia para garantizar los derechos humanos o, por el contrario, vulnerarlos. (Alvarado Alegría, 2016, p.2)

Bajo esta línea, Cairo (2013) considera que el territorio construye y es construido por procesos de transformación, regulación y gobernanza de tal forma que los fenómenos espaciales, sociales o políticos no pueden estudiarse aislados unos de otros (p795). Menciona que, “los hechos políticos no pueden ser explicados sin tener en cuenta los contextos, discursos y prácticas espaciales en los que se producen y que producen” (Cairo 2013, p795).

2.2. Derecho a la Ciudad

Durante las últimas décadas el concepto *Derecho a la Ciudad* ha sido objeto de estudio académico, de propuestas legislativas y reivindicación ciudadana. Este concepto propuesto a finales de los años sesenta por Henri Lefebvre, ha representado el soporte y herramienta teórica para dar paso a replantear las formas de pensar y vivir la ciudad. En este sentido, es fundamental iniciar el análisis del Derecho a la Ciudad considerando la propuesta de Lefebvre para posteriormente abordar su desarrollo teórico y referirnos a su trascendencia y dimensión en la actualidad.

En 1968, el filósofo y sociólogo marxista francés Henri Lefebvre, desarrolla la categoría de Derecho a la Ciudad dentro de su libro “Le droit á la ville”. En esta obra, plasma una reflexión teórica tomando como referencia los procesos urbanos desarrollados en París consecuencia de la industrialización y el capitalismo inmobiliario apegado al Plan Haussman¹. Debido a esto, el Derecho a la Ciudad nace dentro de la crítica a la ciudad capitalista que promueve el valor de cambio frente al valor de uso, plantea un llamado a la apropiación de la ciudad más allá del turismo y el consumo para habitarla, construirla, decidir y crearla partiendo de su sentido político. En esta línea, Lefebvre destaca la Comuna de París y Mayo del 68 como importantes procesos de apropiación política de los espacios y las calles de la ciudad (Straehle, 2018, p.233). Además de esta, publicaciones como “La producción del espacio”, “La vida cotidiana en el mundo moderno” y “La revolución urbana”, se constituyen como referentes dentro de la sociología urbana, obras posteriormente profundizadas y criticadas.

¹ El Plan Haussman fue un ambicioso proyecto de renovación urbana impulsado por Napoleón III y ejecutado por el arquitecto Georges-Eugène Haussmann, prefecto del Sena. Este plan buscó convertir a París en “La Ville-Lumière” y en el gran centro de consumo, turismo y placer basado en, una visión keynesiana, excedentes de capital y mano de obra (Harvey, 2012, pp.25-26).

Dentro del desarrollo teórico del Derecho a la Ciudad, el geógrafo David Harvey profundiza y actualiza la propuesta lefebvriana sobre la lógica capitalista en la dimensión espacial y urbana. Si bien los dos comparten perspectivas marxistas, tienen distintos enfoques. Lefebvre destaca su línea filosófica y sociológica mientras que, Harvey realiza sus aportes desde un enfoque geográfico y económico. Para David Harvey (2012)

La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía para los que tienen dinero, como lo ha hecho la propia ciudad en un mundo en el que el consumismo, el turismo, las actividades culturales y basadas en el conocimiento, así como el continuo recurso a la economía del espectáculo, se han convertido en aspectos primordiales de la economía política urbana. (Harvey, 2012, p.34)

Dentro de este contexto, Harvey menciona que el Derecho a la Ciudad en la actualidad no solo es demasiado estrecho, sino que en la mayoría de los casos está “en manos de una pequeña elite política y económica con capacidad para configurar la ciudad según sus propias necesidades particulares y sus deseos más íntimos” (p.47). A partir de la reconfiguración geográfica que esto supone, destaca los cambios en el estilo de vida y cómo las nuevas geografías urbanas bajo el capitalismo, suponen inevitablemente desplazamiento y desposesión (p.39).

Bajo este contexto, el autor destaca que, si partimos de reconocer que la ciudad que queremos no se aleja del tipo de personas que queremos ser, las relaciones sociales y con la naturaleza que apreciamos y el estilo de vida que deseamos, el Derecho a la Ciudad implica un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. (p.20). Implica:

El poder colectivo de remodelar los procesos de urbanización, susceptible de promover el desarrollo de nuevos “lazos sociales” entre ciudadanos, de una nueva “relación con la naturaleza”, con nuevas “tecnologías”, nuevos “estilos de vida” y nuevos “valores estéticos”, a fin de “hacernos mejores”. (Harvey, 2018 citado por Garnier, 2012, p.220)

En este sentido, es reafirmada la noción del Derecho a la Ciudad no como un derecho individual sino como *derecho común* ya que, su ejercicio y la transformación de la ciudad, depende inevitablemente de un poder colectivo.

Alrededor del Derecho a la Ciudad, se han planteado diversos enfoques, así como críticas a su ejercicio. Carrión y col. (2019) destaca que es un concepto en disputa ya que el Derecho a la Ciudad como “concepto, idea y “slogan” se moviliza entre distintos marcos discursivos” (p.12). En este marco, los autores señalan que el discurso del Derecho a la Ciudad no es un discurso homogéneo, se han evidenciado diversos casos donde el Derecho a la Ciudad ha sido herramienta de movilización con diferentes sentidos, haciendo que el Derecho a la Ciudad represente un paraguas general que recoge e implica distintas demandas urbanas socialmente no satisfechas. Es decir, el Derecho a la Ciudad ha sido soporte de un abanico muy amplio de demandas que van desde temas sobre movilidad y seguridad hasta vivienda y suelo (Carrión & Dammert, 2019, p.13).

En los últimos años, el Derecho a la Ciudad se ha posicionado como un modelo y concepto que proporciona un marco alternativo para repensar las ciudades y los asentamientos humanos basándose en principios de justicia social, democracia y sostenibilidad (CGLU, 2019). De esta forma, los planteamientos lefebvrianos en torno al sistema capitalista y la dimensión urbana en el proceso de acumulación del capital a fines de los sesenta, actualmente se encuentra presente en el discurso de

organismos internacionales, académicos, tecnócratas y movimientos sociales urbanos bajo distintos significados y matices (Carrión, 2019, p.9).

Teniendo en cuenta las mutaciones que ha sufrido la propuesta original (Carrera Hernández, 2019, p.5), han emergido críticas a la posible banalización del concepto, así como a su lectura reformista (Lopes De Souza, 2010, citado por Carrera Hernández, 2019, pp.5-6). Adicionalmente, se ha considerado que los planteamientos originarios no permiten una profunda discusión jurídica (Correa Montoya, 2010, p.135) ya que, de acuerdo a los postulados de Lefebvre, el Derecho a la Ciudad no debe entenderse como una cuestión jurídica o normativa, más bien es el escenario de una religión civil para transformar la ciudad, se refiere al goce y a la apropiación de los habitantes (Palero, 2016, p.88).

Pese a lo antes expuesto, a finales de los años 90 empieza el reconocimiento de diversos instrumentos que recogen preocupaciones ambientales como la Carta urbana europea (Consejo de Europa, 1993), Carta de las eurociudades (1996), Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2000), entre otros, que son soporte y referencia para impulsar procesos ciudadanos, políticos y normativos que van más allá del derecho a la vivienda. Como parte de estos procesos, es importante señalar la experiencia brasileña donde el Derecho a la Ciudad fue incorporado en la Constitución de 1998 como resultado de demandas urbanas de sectores populares (Carrión & Dammert-Guardia, 2019, p.14). De forma similar, podemos destacar el reconocimiento del Derecho a la Ciudad en la Constitución de Ciudad de México en el año 2017. Dentro de esta, se garantiza el uso y el usufructo de la ciudad, se reconoce su carácter colectivo, su función social, gestión democrática y justicia territorial. Al mismo tiempo, se incorporan principios de justicia social, participación, sustentabilidad, respeto a la

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente (Constitución de la Ciudad de México. 2017, Art.12).

2.3. Derecho a la Ciudad en Ecuador

En el contexto ecuatoriano, el Derecho a la Ciudad es reconocido como derecho fundamental en el marco de la Asamblea Constituyente de 2008. Previo a esto, podemos encontrar en la Constitución de 1998 derechos conexos como: la vivienda, al medio ambiente sano, agua, etc. Con el cambio constitucional de 2008, dentro de los Derechos del Buen Vivir, se reconoce el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, considerando los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural (CRE, Art.31). Al mismo tiempo, se incorporan tres elementos que acompañan al Derecho a la Ciudad: a) gestión democrática de la ciudad; b) función social y ambiental de la propiedad y la ciudad; c) ejercicio pleno de la ciudadanía. Además, el artículo 23 reconoce el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural y cohesión social.

En cuanto al reconocimiento legal, el ejercicio del Derecho a la Ciudad es establecido como objeto de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS, Art.1). En consecuencia con esto, el Derecho a la Ciudad es considerado como parte de los principios rectores para el ordenamiento territorial, uso y la gestión del suelo (LOOTUGS, Art.5.6). Dentro de esto y en concordancia con la Constitución, se desarrolla el contenido del Derecho a la Ciudad en los siguientes términos. Inicialmente, se establece el ejercicio pleno de la ciudadanía que asegure la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia. Posteriormente, la gestión democrática de las ciudades implica formas directas y representativas de participación democrática

en la planificación y gestión de las ciudades, así como mecanismos de información pública, transparencia y rendición de cuentas. Además, respecto a la función social y ambiental de la propiedad, se establece el deber de anteponer el interés general al particular y garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable (LOOTUGS, Art.5).

Si bien el reconocimiento constitucional y legal de ciertos principios representa un avance en materia de derechos, así como una puerta para demandas urbanas, una de las principales limitaciones es que no se ha visto reflejada en normativas y leyes específicas que guíen la acción de los municipios (Carrión & Dammert-Guardia, 2019, pág.15). En este sentido, el Derecho a la Ciudad dentro de la normativa nacional se ha limitado al reconocimiento de principios que no logran repercutir en la normativa y realidad local. Esa situación se complementa con un enfoque principalmente regulatorio y/o sancionatorio en el uso y ocupación del suelo, en apego a las competencias reconocidas en el artículo 264 de la Constitución, pero pasando por alto el Derecho a la Ciudad en la gestión del mismo.

Entre los aportes académicos que han contribuido en la comprensión del Derecho a la Ciudad en Ecuador destacan los siguientes. La investigación realizada en 2019 por Ana Cecilia Salazar, Andrés Martínez Moscoso y Francisco Bermeo concluyó que el Derecho a la Ciudad ha quedado como un principio al que se debe darle contenido, pues en la normativa nacional y local, no existe claridad del concepto por parte de los actores políticos (p.82). Así mismo, Marcela Peñafiel y col. (2019) a través de una lectura espacial del Derecho a la Ciudad en Cuenca, concluye que existe una participación ciudadana y social carente en la conformación del territorio (p.73). De igual forma, Jeremy Rayner (2022) analizando el Derecho a la Ciudad en la ciudad de Quito, menciona que los activistas comunales y otros actores políticos, utilizan ampliamente el lenguaje de los derechos, sin embargo, no hacen uso de su Derecho

a la Ciudad (p.51). En este sentido, los titulares del mismo desconocen su reconocimiento, lo que impide o dificulta su ejercicio a través de las garantías constitucionales (Cárdenas, 2019, p.97).

Uno de los principales aportes al contenido del Derecho a la Ciudad fue desarrollado por la Corte Constitucional en el año 2022 mediante Sentencia No. 2167-21-EP/22. Dentro del análisis constitucional realizado, La Corte destaca que el Derecho a la Ciudad se fundamenta en la necesidad de enfrentar cuestiones como marginalidad, exclusión, riesgos y daños ambientales, asentamientos urbanos inadecuados, inseguridad y las múltiples violencias (Sentencia No. 2167-21-EP/22, párr.101). Asimismo, La Corte se refiere al Derecho a la Ciudad como un derecho difuso, que pertenece a las generaciones presentes y futuras, para ocupar, usar y producir ciudades justas y sostenibles. Menciona que el Derecho a la Ciudad se compone de cuatro elementos: 1. la distribución espacial justa de recursos para asegurar buenas condiciones de vida de toda la población; 2) la gestión democrática de la ciudad, 3) la diversidad social, económica y cultural, y 4) la armonía con la naturaleza (Sentencia No. 2167-21-EP/22, párr.103). De igual forma, en consideración del caso analizado, la Corte Constitucional desarrolla el Derecho a la Ciudad en interdependencia con el derecho a un ambiente sano, derecho al agua y Derechos de la Naturaleza, ámbito que posteriormente será analizado.

2.4. Derechos de la Naturaleza

El reconocimiento de Derechos de la Naturaleza, ha sido un proceso paulatino y heterogéneo, con fundamentos y alcances diversos pero que, al mismo tiempo comparte antecedentes y responde a discusiones globales que no pueden pasar inadvertidas. Debido a esto, previo a referirnos a los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, es importante revisar brevemente el devenir de las preocupaciones

ambientales en el contexto global para comprender las relaciones globales-locales en el reconocimiento y disputa de los Derechos de la Naturaleza.

Diversos autores destacan importantes manifestaciones de preocupación ambiental durante el siglo XIX e inicios del XX. Según Galarza (2018), en sus inicios, las sociedades científicas fueron las primeras organizaciones de carácter ambiental (p.8). Una manifestación de esto es el surgimiento de la Sociedad Zoológica de Londres en 1826, liderada por la naturista Satmford Raffles y dedicada al estudio de animales y plantas. Sin embargo, podemos ubicar como punto de partida de las preocupaciones ambientales el nacimiento de la ecología en 1869 con los estudios de Ernst Haeckel.

Posteriormente, en 1972 Estados Unidos de Norteamérica crea el primer parque nacional del mundo. Galarza (2018) destaca que el objetivo del Parque Nacional Yellowstone fue preservar paisajes naturales de gran belleza para que futuras generaciones puedan contemplarlo (p.8). Pese a esto, Norverto Furtunato (2005) analiza los valores fundacionales alrededor del concepto de parque nacional en el contexto de Yellowstone y otros parques nacionales tempranos. Como parte de esto, el autor destaca la perspectiva conservacionista pero principalmente su aporte al fortalecimiento de un proyecto de Estado-Nación caracterizado por la apropiación material y conceptual del territorio. A criterio del autor, esta situación dio paso a la jerarquización de sus usos y significaciones del territorio funcionalmente adecuadas para contribuir a procesos de conquista conceptual y material del mismo. Como resultado de esto destaca la asociación de estos territorios al concepto wilderness y la consecuente mitificación y/o romanización de espacios naturales (p.317).

De forma complementaria, Carlos Pérez Vaquero (2011) dentro de su publicación *La preocupación legal por el medio ambiente* nos recuerda que,

inicialmente las preocupaciones en materia ambiental no buscaron la protección de la naturaleza o ambiente sino respondieron a las afecciones económicas que ciertas industrias atravesaron consecuencia del impacto ambiental (p.25). En 1896 Estados Unidos denunció a la fundación canadiense Foundation Trail debido a emanaciones de dióxido sulfúrico que contaminaban la producción de cereal en el Estado de Washington, no lo hizo por amor al medio ambiente sino, simplemente, por los perjuicios económicos que aquellos gases estaban ocasionando a su agricultura (Pérez, 2011, p.25). Así mismo, en 1902 doce países europeos firmaron en París la Convención Internacional para la Protección de las Aves Útiles a la Agricultura. Además de reconocer protección a las aves en función de su utilidad para la agricultura, algunos de los cambios introducidos en el borrador fueron muy significativos, porque perjudicaron a muchas especies y rebajaron de manera notable las pretensiones conservacionistas del convenio (Ferrero, 2013). Debido a esto, podemos decir que a inicios del siglo XX las preocupaciones en materia ambiental no respondieron a nociones de derecho a un ambiente sano o Derechos de la Naturaleza sino a un enfoque principalmente productivo.

Durante los últimos cincuenta años, el posicionamiento de discusiones en materia ambiental ha sido una constante y ha marcado una transformación en la forma de relacionarnos con la naturaleza. Eduardo Gudynas (2015), investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), considera que la relación entre la problemática ambiental y los derechos, es tan vieja como la propia discusión ambiental. Se refiere a las primeras denuncias ambientales de agroquímicos en los años sesenta mismas que fueron vinculadas con el derecho a la salud y calidad de vida. Estas preocupaciones se cristalizaron progresivamente en Instrumentos como:

- Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional

La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional también conocida como Convenio RAMSAR, fue firmado en la ciudad de Ramsar-Irán el 2 de febrero de 1971. Este convenio es uno de los primeros para la conservación y cuidado de humedales. Considerando sus funciones ecológicas como reguladores hidrológicos y hábitat de flora y fauna, reguló aspectos relacionados a la conservación de humedales y aves acuáticas. Fue aprobado en Ecuador mediante Decreto Legislativo en el año 1987.

- Declaración de Estocolmo

La Declaración de Estocolmo de 1972 fue producto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, Suecia. Recoge 26 principios referidos a: derechos, preservación y administración de recursos, contaminación, responsabilidad institucional y ciudadana etc.

De forma complementaria al surgimiento de instrumentos como los antes mencionados, a partir de los años sesenta múltiples publicaciones científicas advierten los primeros avisos de la relación entre el cambio climático y la creciente abundancia atmosférica de gases de efecto invernadero. Dentro de este contexto, toman relevancia diversas discusiones sobre las repercusiones del modelo económico en la naturaleza y el ambiente, generando la profundización y transversalización de la cuestión ecológica en múltiples áreas de estudio. Esto fue un elemento importante en la popularización de críticas al desarrollo, extractivismo, antropocentrismo y especismo, así como para propuestas de desarrollo sostenible, decrecimiento, ecocentrismo, economía ecológica, ecología política. etc.

Como parte de la transversalización de la cuestión ecológica, en 1980 Carolyn Merchant escribe “La muerte de la naturaleza: mujeres, ecología y la revolución científica”, siendo una de las primeras teorizaciones de ecofeminismo, y una señal de

los aportes de movimientos ambientalistas, intelectuales y filosóficos que, a criterio de Eduardo Gudynas, fueron alimento para la explosión de la temática ambiental en los años ochenta en el hemisferio norte.

Si bien la comprensión de este contexto es relevante para un entendimiento global-local, es importante tener en cuenta que las preocupaciones ambientales durante las últimas décadas del siglo XX no se desarrollaron exclusivamente en el hemisferio norte. Dentro del contexto latinoamericano, es fundamental hacer alusión a la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo como un importante antecedente del derecho ambiental. La declaración fue adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, fue desarrollada en Río de Janeiro, en el año 1992. Este instrumento reconoce por primera vez la participación ciudadana en temas ambientales y el acceso a justicia ambiental, elementos recogidos en el décimo principio.

Pese a esto, es importante considerar que en América Latina las discusiones ambientales deben ser trasladadas mucho atrás, pues no han sido recientes, pocas, ni homogéneas. Son históricas, emergentes de procesos de denuncia y resistencia, que parten de diversos territorios pero que al mismo tiempo comparten elementos de lucha y reivindicación. Eduardo Galeano (1971) menciona que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos (p.341), haciendo alusión a la historia de abuso y despojo de recursos naturales y humanos al sur global en el marco de la colonización. Estos apuntes son de importancia considerando la fuerza sin precedentes que toman las organizaciones sociales y principalmente indígenas a fines del siglo XX. Estas movilizaciones representaron una respuesta a la implementación de fuertes procesos neoliberales, un acto de reivindicación por los 500 años de resistencia, así como soporte para importantes procesos de cambio.

Sara Victoria Alvarado y Jaime Pineda Muñoz (2014) en su artículo “El giro ambiental de las ciencias sociales” se refieren a la insólita fuerza de los movimientos indígenas a finales del siglo XX, así como la propagación de nuevas consignas que ubican el cuidado de la Madre Tierra en el centro de las luchas sociales (p.15). Esta realidad, a consideración de los autores contrasta con la persistencia agónica de los saberes sociales heredados de Occidente y que resultan insuficientes para comprender los procesos de movilización en Latinoamérica, así como el reconocimiento de Derechos de la Naturaleza desde la perspectiva tradicional (p.15).

En el ámbito ecuatoriano, Enrique Ayala Mora (2014) en su libro Historia Constitucional destaca la transición en los años sesenta de un modelo económico en crisis basado en las exportaciones agrícolas, al auge de las exportaciones petroleras en los años setenta. A su consideración, esto reubicó a grupos sociales, renovó el panorama político y generó cambios acelerados en la sociedad (p.61). Además, Ayala Mora destaca el agotamiento del Proyecto Nacional Mestizo para dar paso a un proyecto nacional basado en la diversidad, caracterizado por movilizaciones populares y la construcción de un nuevo marco de demandas sociales (pp.61-62). En este sentido, durante las últimas décadas del siglo XX, se develan diversas tensiones sociales, políticas y ambientales en un contexto de transformación y contradicciones. Por un lado, se caracteriza el auge de políticas neoliberales alineadas a la suscripción de Ecuador al Consenso de Washington y, por otro lado, el posicionamiento de importantes demandas y procesos relacionados a la defensa de la autodeterminación, del territorio y la naturaleza.

De la misma forma, Vladimiro Álvarez Grau (2001) recordando al primer levantamiento indígena de 1990, destaca su capacidad de convocatoria y movilización, así como la toma de espacios y el posicionamiento de demandas

provenientes de una minoría que, súbitamente, planeaba un cambio total de la estructura del Estado y de la sociedad ecuatoriana (p.27). Dentro de este escenario, sus demandas y propuestas, paulatinamente se fortalecen narrativas en torno al Sumak Kawsay o Buen Vivir, propuesta epistémica fundamentada en saberes y prácticas de culturas andino-amazónicas que posteriormente serán recogidas en la Constitución de 2008.

El escenario antes mencionado es complementario a lo que Gudynas (2015) considera un segundo momento de trascendencia para la problemática ambiental: la llegada principalmente en los países andinos de nuevos actores sociales y gobiernos progresistas. Esto representó una respuesta política al contexto neoliberal, pero también, el fundamento para importantes procesos constituyentes que posteriormente ingresaron a la categoría de neoconstitucionalismo latinoamericano, pudiendo ubicar como punto de partida la Constitución de 1988 de Brasil y como punto culmine las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).

A consideración del profesor Hugo Tórtora (2021), el rasgo material que caracteriza a estas constituciones es su carácter descolonizador, por el cual reaccionan frente a siglos de dominación cultural, política, jurídica y económica. (Tórtora, 2021, sección de Introducción) Asimismo, Ramiro Ávila Santamaría (2012) destaca que las reivindicaciones promovidas por los pueblos indígenas son descolonizadoras y además poscapitalistas (p.35) ya que se evidencia la caída de un estado nacional homogeneizante hacia un estado plurinacional, con demandas de pluralidad jurídica y respeto a la Pachamama. Se posicionan críticas al valor de cambio y extractivismo en la naturaleza para dar paso a la construcción de relaciones más justas y armónicas.

Si bien la Constitución de 2008 es la mayor expresión de este proceso, dentro de la Constitución de 1998 podemos encontrar algunos antecedentes importantes. Dentro de los derechos colectivos reconocidos en el capítulo cinco, se establece el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. De igual forma, esta constitución reconoce la preservación del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, así como el deber de establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, por las acciones u omisiones que contravengan normas de protección ambiental. Así mismo, establece la obligación del estado en poner especial atención a las provincias de la región amazónica para su desarrollo sustentable y preservación ecológica. Con esto, podemos dilucidar un derecho constitucional ambiental ecuatoriano poco desarrollado y que mantiene un enfoque conservacionista de la naturaleza.

La aprobación de la Constitución de Montecristi representó tanto un logro como un punto de partida en la construcción de una utopía. Juan Montaña Pinto (2012) menciona que el pueblo ecuatoriano exigió una verdadera revolución jurídica para sembrar no solo las bases de una nueva institucionalidad sino también determinados valores, contenidos y condiciones sustanciales vinculadas con la realización de la justicia, la igualdad y la dignidad de las personas y la naturaleza (p.17).

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, responde en primera instancia a un proceso constituyente histórico en términos políticos; sin embargo, los valores en este proceso no pueden entenderse aislados de los antecedentes expuestos previamente. Como se ha mencionado, atienden un cambio desde el sur, que posiciona una relación de armonía y respeto con la naturaleza y que representan el tránsito de un paradigma antropocéntrico hacia uno biocéntrico. A consideración de Pinto y col. (2018), la naturaleza y sus recursos naturales dejan de

ser comprendidos como mercancía o bien, objeto de relación jurídica, para convertirse en el centro del mundo, donde el hombre está inserido y del cual hace parte (p.162). En consecuencia, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza evidencia un periodo de tránsito político y axiológico que proyecta cambios en la forma de reconocer a la naturaleza, de objeto de apropiación y explotación, a sujeto de derechos y protección.

Como manifestación de lo antes expuesto, el preámbulo de la Constitución recoge importantes elementos que dan contexto y fundamento a las transformaciones jurídicas y al reconocimiento de Derechos de la Naturaleza. Inicialmente, reconoce las raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, menciona la celebración a la naturaleza o la Pacha Mama, se la reconoce como vital para nuestra existencia y al mismo tiempo nos reconocemos a nosotros como parte de ella. De igual forma, nos declaramos herederos de luchas sociales y reconoce la decisión de construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza estableciendo como objetivo alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay. Estos antecedentes recogidos en el preámbulo, dan razón y se complementan con los principios ambientales y derechos reconocidos a la naturaleza que a continuación serán revisados.

Dentro de los derechos reconocidos a la naturaleza en la Constitución de 2008, el artículo 71 reconoce el respeto a su existencia, así como el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Por otro lado, el Art. 72 establece el derecho de la naturaleza a su restauración, así como su independencia con la obligación del Estado y personas naturales o jurídicas de indemnizar a individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

El mismo artículo, atendiendo a posibles casos de impacto ambiental grave o permanente, prevé la obligación del Estado de establecer mecanismos y medidas eficaces para restaurar, eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Por otra parte, considerando que, de conformidad con el Art. 11 inciso primero de la Constitución, los derechos se pueden ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva; el Art. 71 menciona que los Derechos de la Naturaleza podrán ser exigidos por toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad.

Respecto a los principios ambientales reconocidos por la Constitución de 2008 se encuentran:

1. Modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado, que considere la capacidad regenerativa de los ecosistemas y las necesidades ambientales de las futuras generaciones.

2. Políticas de gestión ambiental transversales y obligatorias para el Estado en todos sus niveles y para todas las personas naturales o jurídicas.

3. Participación activa y permanente de personas, pueblos, comunidades y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de actividades que generen impactos ambientales.

4. Pro natura, donde en caso de duda sobre el alcance de una norma, se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

5. La obligación del Estado de evitar impactos ambientales negativos a través de políticas y medidas oportunas cuando exista certidumbre de daño.

6. Aunque no exista evidencia científica, la obligación del Estado de proteger mediante medidas oportunas y eficaces cuando exista duda de impacto ambiental por acciones u omisiones.

7. Responsabilidad objetiva por daños ambientales.

8. Imprescriptibilidad de acciones legales para la sanción de daños ambientales.

9. Responsabilidad de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios en la prevención de impactos ambientales.

10. Consulta previa a la comunidad de toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente.

11. Tutela judicial efectiva, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares para cesar el daño producido.

12. Inversión de carga probatoria, siendo el demandado quien debe demostrar la inexistencia de daño potencial o real.

Además del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza y principios ambientales antes expuestos, y en coherencia con la consecución del Buen Vivir, la Constitución refleja la transversalización de la noción ambiental en ámbitos como: régimen de desarrollo, sistema económico, política económica, endeudamiento público, entre otros. Asimismo, reconoce la función social y ambiental de la propiedad, lo que representa límites al Estado y límites a determinadas libertades empresariales y de dominio considerando, en este caso, la protección de intereses sociales y ambientales. Asimismo, es importante hacer alusión al Régimen de Desarrollo dentro del cual se reconocen como objetivos, mantener un ambiente sano y sustentable, que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo.

Dentro del Código Orgánico del Ambiente (CODA), -cuerpo normativo aprobado en 2018- el Art. 6 referente a Derechos de la Naturaleza, menciona que para la garantía de su ejercicio se deben incorporar en la planificación y el ordenamiento

territorial, criterios ambientales teniendo en consideración los ecosistemas y territorios. Por otra parte, dentro del Art. 9 retoma y profundiza los principios ambientales reconocidos en la Constitución como el principio de subsidiariedad, in dubio pro natura, desarrollo sostenible, etc.; a la vez que reconoce el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales, entre otros.

Respecto al desarrollo de los Derechos de la Naturaleza por parte de la Corte Constitucional, el Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza (2021) observa que el mayor avance jurisprudencial en materia ambiental, en términos cuantitativos y cualitativos, se ha dado durante la conformación de la Corte Constitucional del periodo 2018-2022 (p.34). En este sentido, Diego Parra (2017), refiriéndose al examen de constitucionalidad de fondo y forma de la Ley de Minería del año 2009, destaca la insuficiencia argumentativa por parte de la corte teniendo en cuenta la omisión de un examen de constitucionalidad de fondo respecto a los impactos reales de la minería. (p.138) Dentro de este contexto, Parra (2017) considera que “el desarrollo jurisprudencial reproduce un tipo de sustentabilidad que privilegia la eficiencia económica y la reproducción de un esquema civilizatorio y de dominio sobre la naturaleza” (p. 142). Como parte de esto, Barahona y Añazco (2020) manifiestan que la interpretación constitucional ha respondido a una lógica antropocéntrica, por lo que señala la necesidad y desafío de plantear un método hermenéutico intercultural que integre cosmovisiones y materialice los Derechos de la Naturaleza (p.58).

Pese a lo señalado previamente, dentro del desarrollo jurisprudencial en materia ambiental, en el año 2021 La Corte resuelve reconocer al ecosistema manglar y al Río Aquepi como titulares de derechos mediante Sentencia No. 22-18-IN/2 y Sentencia No. 1185-20-JP/21 respectivamente. Por otra parte, en el año 2022, dentro

del Caso “Mona Estrellita”, mediante Sentencia No. 253-20-JH/22 La Corte declaró la vulneración a los Derechos de la Naturaleza debido a los hechos que terminaron en la muerte de la mona chorongo Estrellita. Dentro de esta decisión, dispone a la Asamblea Nacional debatir y aprobar una ley sobre los derechos de los animales en el término de hasta dos años. Además, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al acceso a la justicia ecológica haciendo hincapié en que los Derechos de la Naturaleza -como todos los derechos- tienen plena fuerza normativa y no constituyen solamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos. (Sentencia No. 1149-19-JP/21, párr.35) Asimismo, dentro de sentencias: No. 1149-19-JP/21, 32-17-IN/21, 1185-20-JP/21, ha generado importantes aportes jurisprudenciales respecto al cuidado y valor de los ríos, caudal ecológico, bosques, y otros ecosistemas a la vez que ha profundizado en principios como: principio ecológico de tolerancia, in dubio pro natura, principio precautorio, entre otros.

Si bien podemos destacar el carácter garantista de la constitución así como evidenciar importantes avances jurisprudenciales en materia ambiental durante los últimos años, Diego Parra (2017) advierte que la Constitución devela ciertas antinomias jurídicas en el sentido de reconocer un nuevo marco axiológico relacionado al respeto y armonía con la naturaleza a la vez que reconoce la posibilidad de extraer recursos naturales mediante resoluciones motivadas (Art.398) o peticiones fundamentadas para la declaratoria de interés nacional (Art.407) (p.133). Finalmente, Ximena Roncal (2013) destaca que, “la defensa de los Derechos de la Naturaleza significa hoy la defensa de la Vida y de los elementos indispensables que la componen, es defender las políticas sociales y oponerse a las políticas privatizadoras de los recursos” (p.122). Pese a esto, Esperanza Martínez y Alberto Acosta (2010) consideran que la Naturaleza como sujeto de derechos es un proceso en construcción

cuyo reconocimiento es importante en tanto representa un punto de quiebre con las visiones liberales sobre la Naturaleza, sin embargo, no es suficiente, “requiere romper barreras complejas, que remueven los cimientos civilizatorios, las estructuras dominantes del modelo y las formas de operar de los Estados” (p.2938). Como parte de esto, Barahona y Añazco (2020) señalan que, dentro de los desafíos que recoge el derecho ambiental, está alcanzar una interpretación constitucional intercultural. Para esto, señalan que es necesario alejarnos de prácticas o paradigmas clásicos de la dogmática jurídica y acercarnos a la construcción de nuevas formas de ver y entender el derecho (p.57).

En este sentido, es necesario puntualizar que los Derechos de la Naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador representan un hito en la lucha de movimientos sociales y defensa de la naturaleza. Sin embargo, al mismo tiempo que son un punto de partida para la proyección de una sociedad con nuevos valores, prácticas y relaciones. A partir de las tensiones, contradicciones, y desafíos recogidos, es pertinente señalar que “toda declaración de derechos constitucional siempre —y no puede dejar de serlo— debe ser utópica y plantear una realidad que, siendo difícil o hasta imposible de alcanzar, es deseable luchar porque se la consiga” (Ramiro Ávila, 2011, p.67).

2.5. Interdependencia entre ciudad y naturaleza

A lo largo de este capítulo fueron abordados algunos elementos en torno a la ciudad y su componente político. De forma similar, se plantearon importantes consideraciones en el estudio de los Derechos de la Naturaleza. A partir de esto, a continuación, se llevará a cabo una propuesta relacional entre los elementos antes expuestos; es decir, se planteará una lectura interdependiente del fenómeno urbano con la naturaleza y sus derechos. Dentro de esto, inicialmente se llevará a cabo una

revisión crítica de la relación entre ciudad y la naturaleza para posteriormente comentar algunas propuestas de interdependencia entre ellas, mismas que se erigen a la luz de los desafíos del siglo XXI.

Noah Harari (2014) destaca que previo a la revolución industrial el Homo sapiens ostentaba el récord entre todos los organismos por provocar la extinción del mayor número de especies de plantas y animales. (p.72) Teniendo en cuenta los procesos de dominación, acumulación y expansión, antropólogos ubican a la revolución agrícola y sedentarismo como punto de inflexión en nuestra relación con la naturaleza. Asimismo, Castillo Sarmiento y col. (2017) destacan que la llegada de la agricultura y ganadería representó que la naturaleza sea conquistada y explotada, incluso provocando extinciones, para sostener el crecimiento de poblaciones e identificar enemigos naturales (p. 351).

Por otra parte, el geógrafo David Harvey (1996) sostiene que dentro del pensamiento ecologista contemporáneo suele ubicarse como origen de muchos males ambientales al doble ideal de la Ilustración -de emancipación humana y autorrealización- complementada con la tesis de que la naturaleza estaba para ser utilizada y que su dominación era un proyecto factible (p. 160). Destaca que, a la luz del periodo industrial, los animales ya no eran considerados asistentes vivos como sucedía en la Edad Media, sino que se interpretaban como máquinas (p. 160). A su consideración, estos principios de la Ilustración han modelado poderosamente actitudes hacia el mundo natural en formas que han perdurado hasta la actualidad (p.163).

Si bien los antecedentes antes expuestos dan luz de una relación con la naturaleza basada en el dominio y explotación, es necesario tomar en cuenta las transformaciones de esta relación dentro del fenómeno urbano. De acuerdo a las

Organización de la Naciones Unidas, en la actualidad aproximadamente el 57% de la población mundial vive en ciudades (Banco Mundial, 2021) y cada segundo la población de las ciudades se incrementa en dos personas (Minnaert et al., 2016, p.7). Esto, ha comprometido a la naturaleza no sólo por la masiva urbanización en términos de expansión territorial, sino por hábitos de consumo y producción, demandas energéticas, extracción de recursos y gestión de aquello que la ciudad desecha. En este sentido, la ciudad se constituye bajo dinámicas de consumo y producción que implica dependencia de recursos y materias primas de otros territorios, en definitiva, de la naturaleza.

Santiago Palero (2016) señala que, la naturaleza urbana de la industrialización se extiende más allá del espacio físico de la ciudad, constituye un sentido civilizatorio que se derrama a través de las infraestructuras que van surcando el campo (p.87). En esta línea, es necesario considerar que la historia de los dos últimos siglos no es sólo una de rápida industrialización, desplazando a la agricultura como actividad preeminente de las sociedades, sino también de la urbanización implacable (Bormann et al., 2016, p.3).

De acuerdo al informe de Ascensão et al., (2018) el crecimiento urbano fue responsable de la pérdida de 190,000 km² de hábitat natural entre 1992 y 2000 (p.4). En este sentido, José Ramón (2010) destaca que, dentro de la globalización, las demandas de consumo urbano acceden hasta los lugares más recónditos y tienen efecto directo sobre los campos y entornos naturales de todo el planeta, bajo la forma de explotación de recursos naturales o de degradación de espacios (p.170). De igual forma, el autor menciona la relación desequilibrada entre los flujos urbano-rurales teniendo en cuenta, por ejemplo, la extracción de recursos por parte de la ciudad y la exportación de desechos hacia el campo (p.174). De forma complementaria, Guzmán

Álvarez (2010) destaca que las áreas rurales próximas a las ciudades han desempeñado el papel de reservas territoriales para la expansión de áreas residenciales, industriales y comerciales (p.171).

Teniendo en cuenta que el espacio urbano y espacio rural como caras de una misma moneda (Hernández et al., 2020, p. 441), durante las últimas décadas ha sido prioritario discutir la responsabilidad e impacto de las ciudades en el territorio, la naturaleza y el cambio climático. Bajo un enfoque transversal entre la composición de las ciudades y el ámbito ambiental, ha sido necesario la incorporación del imperativo ecológico en la planificación y gestión de las ciudades. Esto ha sido alimentado significativamente por el reconocimiento de desafíos ambientales y lecturas de resiliencia frente a la crisis climática, que ubican a los entornos urbanos como espacios de vital importancia.

Así mismo, a partir de nuevas perspectivas del Derecho a la Ciudad, emerge el derecho socio ambiental a la ciudad como aquel que incide tanto en lo rural como en lo urbano en la construcción de territorios articulados y armonizados socio ambientalmente. Hernández y otros (2020) lo identifican como un derecho que entiende a la naturaleza globalmente, con sus facetas, contradicciones y particulares. Implica comprender los asentamientos humanos como parte de ecosistemas complejos, que requieren de interacciones con equilibrio y respeto. (p.465). En este sentido, Navarrete (2014) menciona que, la complejidad de los problemas ambientales demanda acciones inmediatas en los diferentes niveles territoriales (global, regional y local). Sin embargo, estas acciones deben ser diseñadas de forma conjunta pues no pueden ser prácticas sectoriales aisladas o descontextualizadas de la realidad territorial (p.505).

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano podemos destacar una primera relación de interdependencia entre el Derecho a la Ciudad y los Derechos de la Naturaleza a partir del principio de indivisibilidad, interdependencia e igualdad de jerarquía en el ejercicio de derechos reconocido en el artículo 11 numeral 6 de la Constitución. Por otro lado, el artículo 31 del mismo cuerpo normativo reconoce el derecho al disfrute pleno de la ciudad bajo el principio de equilibrio entre lo urbano y rural y menciona que el ejercicio del Derecho a la Ciudad se basa en la función social y ambiental de la propiedad y la ciudad. Si bien esto ya se comentó previamente, es fundamental tener en cuenta la constitucionalización de la función ambiental de la ciudad ya que esto exige reflexionar y replantear las relaciones entre ciudad y naturaleza.

Por otra parte, es fundamental recordar que la ciudad no puede entenderse lejos del Régimen de Desarrollo. De acuerdo al artículo 275 de la Constitución, el Régimen de Desarrollo implica una relación de sistemas ambientales, económicos, socioculturales y políticos, que garantizan la realización del buen vivir y se relacionan de forma organizada, sostenible y dinámica. En consecuencia, dentro de los objetivos del Régimen de Desarrollo se encuentran: mantener un ambiente sano y sustentable, garantizar el acceso permanente y de calidad al agua, aire y suelo, promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo, etc. En este sentido, el régimen de desarrollo puede ser entendido como un punto de interdependencia entre ciudad y naturaleza, pues la aplicación de imperativos ambientales y la consecución del Buen Vivir no puede materializarse es un escenario de desarticulación territorial.

Respecto al ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, se reconoce como deber del Estado adoptar políticas integrales y participativas que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el

establecimiento de zonas verdes (CRE, Art.415). Asimismo, se establece que el territorio de las provincias amazónicas debe contar con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas (CRE, Art.250). Por otro lado, la gestión del Patrimonio Natural se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica (CRE, Art.404). Finalmente, podemos ubicar la relación entre ciudad y los Derechos de la Naturaleza a la luz de los principios ambientales reconocidos en el artículo 395 de la Constitución. Dentro de esto, se reconoce un modelo de desarrollo sustentable y ambientalmente equilibrado, a la vez que establece la aplicación de políticas de gestión ambiental de manera transversal y de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional.

Por otra parte, dentro del Código Orgánico del Ambiente (CODA), el artículo 6 menciona que para la garantía de los Derechos de la Naturaleza se deben incorporar en la planificación y el ordenamiento territorial, criterios ambientales territoriales que pongan en consideración a los ecosistemas. Así mismo, dentro de las responsabilidades del Estado se reconoce instaurar estrategias territoriales nacionales que tengan en cuenta criterios ambientales de conservación, uso sostenible y restauración del patrimonio natural. (CODA, Art.8) En este sentido, el CODA se refiere al deber de los GADs de generar política ambiental y planes de ordenamiento territorial que incorporen criterios de cambio climático, biodiversidad en la planificación territorial, entre otros.

Así mismo, dentro de la regulación a la zona marino costera, el CODA establece obligatoriedad de regulación en el desarrollo urbano e inmobiliario a través de un análisis de riesgos. Por otro lado, en el artículo 59 se reconocen las zonas de amortiguamiento ambiental las cuales buscan contribuir a la conservación y la integración de las áreas protegidas, el equilibrio en el desarrollo urbano-rural y su

conectividad ecosistémica. De la misma forma, en atención al manejo responsable del arbolado urbano, el artículo 152 establece de interés público el establecimiento, conservación, manejo e incremento de árboles en las zonas urbanas, con el fin de promover el desarrollo urbano sostenible.

En el marco de la interdependencia entre ciudad y naturaleza, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), tiene como objeto establecer principios y reglas para la articulación eficaz del suelo urbano y rural, la promoción de desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y el ejercicio del Derecho a la Ciudad, hábitat seguro y saludable. Asimismo, se reconoce el deber de impulsar un desarrollo urbano inclusivo e integrador. para alcanzar el Buen Vivir de las personas. (LOOTUGS, Art.1) Dentro de los fines de la mencionada ley, se reconoce promover el aprovechamiento del suelo conforme a los principios de eficiencia, equidad, racionalidad y equilibrio con la finalidad de consolidar un hábitat seguro y saludable, así como un sistema de asentamientos humanos policéntrico, articulado, complementario y ambientalmente sustentable (LOOTUGS, Art.3.4).

Dentro de los principios rectores del ordenamiento territorial se encuentran: la promoción del desarrollo sustentable, Derecho a la Ciudad, distribución equitativa de cargas y beneficios, manejo eficiente y racional de los recursos, calidad de vida de las futuras generaciones, el disfrute del patrimonio natural, entre otros (LOOTUGS, Art.5).

A criterio personal, es importante señalar la perspectiva antropocéntrica de los principios, así como la ausencia del principio de respecto a los Derechos de la Naturaleza y sus ciclos evolutivos. En este sentido, a lo largo del cuerpo normativo los Derechos de la Naturaleza son reconocidos únicamente en el ámbito de suelo rural para aprovechamiento extractivo, en lo demás, no se supera la perspectiva de

“patrimonio natural” sin dar lugar al rol de los Derechos de la Naturaleza dentro de la planificación urbana y rural.

Respecto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, como se manifestó previamente, el caso Río Monjas dio paso a un importante análisis constitucional en torno al derecho al agua, derecho al desarrollo sostenible, Derecho a la Ciudad, derecho de la naturaleza, entre otros. En este sentido, mediante Sentencia No. 2167-21-EP/22 la corte consideró que para analizar la problemática del Río Monjas de forma integral es pertinente invocar, desarrollar y aplicar el Derecho a la Ciudad reconocido en la Constitución. Asimismo, evoca pronunciamientos antes referidos donde se reconoce a la naturaleza como un conjunto interdependiente e indivisible de elementos bióticos y abióticos y, reafirma el principio de armonía con la naturaleza como parte del contenido del Derecho a la Ciudad.

Finalmente, dentro de las medidas de no repetición establece la expedición de una ordenanza “verde-azul”. La corte menciona que esta ordenanza debe ser “verde” en tanto que valore, respete, proteja y restaure a la naturaleza y sus interrelaciones con la ciudad y sus habitantes, y “azul” por la conservación y restauración de las fuentes de agua y sus ecosistemas (Sentencia No. 2167-21-EP/22, párr.161).

En el marco de los desafíos ambientales y urbanos que recoge este siglo, en la actualidad podemos encontrar importantes elementos teóricos y normativos que coadyuvan a proyectar nuevas relaciones entre la ciudad y la naturaleza. Dentro de esto, Martínez & Acosta (2017) consideran que “los Derechos de la Naturaleza pueden y están actuando como como un elemento adicional para la defensa del territorio” (p.2934). Esto, implica también la posibilidad de construir nuevas formas de habitar la ciudad y ejercer el Derecho a la Ciudad, en interdependencia con el territorio, la naturaleza, sus ciclos y agentes; comprendiendo a las ciudades como parte de un

ecosistema complejo sobre el cual influimos a la vez que dependemos. Esto, no sólo significa plantear una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza tomando en cuenta un Derecho a la Ciudad en relación con las responsabilidades ambientales y generacionales, sino al mismo tiempo representa un acuerdo político, ciudadano y social de autodeterminación en consonancia con la naturaleza.

CAPÍTULO III

Mecanismos de Participación Ciudadana en la Defensa de Derechos Relativos a la Naturaleza y el Territorio

3.1. Democracia y Participación Ciudadana

En la actualidad, la participación ciudadana representa un principio, derecho e imperativo que se asienta en todas las escalas y etapas de la política pública. Desde análisis teóricos, discursos políticos y movimientos sociales hasta instrumentos internacionales y cuerpos normativos han dado cuenta de la participación ciudadana como síntoma y motor de cambios en el escenario político. Este proceso ha sido paulatino y ha representado un tránsito en la concepción y construcción de la democracia, lo que al mismo tiempo ha permitido el posicionamiento de nuevas demandas, perspectivas y discusiones. A continuación, se hará alusión de forma inicial al tránsito y articulación entre un paradigma de democracia representativa y un paradigma de democracia participativa. Posteriormente, haremos referencia de forma general a la arquitectura normativa ecuatoriana para finalmente señalar algunas críticas y aportes de importancia en el estudio de la participación ciudadana.

Como se ha señalado previamente, las últimas décadas del siglo XX representaron un importante periodo de tensión y transición política y social. Múltiples narrativas

respecto a la participación ciudadana en asuntos públicos tomaron gran relevancia y progresivamente se han convertido en un requisito sine qua non en la construcción de políticas y respuestas a los problemas actuales. La inserción de la participación ciudadana de forma imperativa dentro de la gestión pública ha sido un proceso paulatino que a consideración de Pacheco Vega (2001), a partir de los años 80 y principios de los 90, ha tomado una relevancia que antes no tenía (p.26). A su consideración, en la actualidad la participación no se limita al diseño de las políticas públicas, sino que se extiende hasta su implementación y evaluación (p.26).

Pese a esto, el surgimiento de nuevos modelos y propuestas de participación ciudadana no están aisladas del desgaste y falta de legitimidad de un modelo democrático puramente representativo.

La democracia representativa o indirecta ha sido típica de los estados modernos donde la soberanía radica en el pueblo y este elige a sus representantes de forma periódica a través del sufragio. En palabras de Rodrigo Borja (1971), la democracia representativa se realiza “cuando el pueblo confía la función gubernativa a determinadas personas, quienes la desempeñan en nombre y representación de aquel” (p.87). Por otra parte, Norberto Bobbio (2001) considera que la democracia representativa “quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin” (p.52). Si bien la democracia representativa es el modelo tradicional que ha acompañado a los Estados modernos, Francisco Paoli Bolio (2010) señala que “el sistema de representación ha venido perdiendo eficacia y, sobre todo, confianza de la ciudadanía en sus representantes” (p.168). Esto, al mismo tiempo representa el desgaste del sistema en sí mismo, pues la confianza es un elemento fundamental de este.

Dentro del contexto ecuatoriano, Simón Pachano (2007) destaca que la propia insatisfacción con los rendimientos económicos y sociales ha llevado a cuestionar no solamente el funcionamiento de las instituciones, sino también su representatividad, es decir, su capacidad de expresar y procesar las demandas sociales (pp.174-175). En este sentido, la erosión o desgaste de la democracia representativa a la que nos referimos, en gran medida responde a la falta de legitimidad hacia la clase política, al sostenimiento de partidos políticos desgastados y políticas clientelares, a la vez que nuevas luchas sociales han demandado espacios de participación y representatividad.

Como parte de la crisis institucional y democrática dentro de nuestro contexto, Borja (2016) destaca la revocación del mandato de tres presidentes democráticamente electos: Abdalá Bucaram en 1995, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2000. A su criterio, esto tiene directa relación con la irrupción de la participación social y ciudadana entre 1990 y 2005 (p.7).

Pese a esto, Emilio Rabasa Gamboa (2020) considera que la crisis de la fatiga democrática no es exclusiva de un país o de un grupo de países, sino que se ha manifestado en naciones de diferentes antecedentes y contextos históricos y culturales (p.354). Esto, de alguna forma expone la relación local-global en las transformaciones conceptuales, demandas sociales y propuestas en torno a la democracia considerando la insuficiencia de la democracia representativa.

A partir de esto, ha sido imperativo ampliar las concepciones de democracia para adoptar una que se aproxime en mayor medida al gobierno de todos. Con esto, en los últimos años diversas propuestas y aspiraciones fundamentadas en la participación y corresponsabilidad ciudadana, han representado una ruptura a la tradición delegacionista en la gestión pública. A nivel regional y global, propuestas y mecanismos de democracia basados en la participación ciudadana se posicionan

como una respuesta y complemento a la democracia basada exclusivamente en la representación.

Dentro de lo mencionado, el concepto de democracia participativa ha tomado un rol fundamental en las democracias contemporáneas. Néstor Calbet (2012) recoge la definición de Ángel Calle Collado (2011) quien la considera como un modelo donde la gestión pública se pone en manos de los ciudadanos (quienes pasan a ser los gobernantes) estableciendo canales de participación: desde iniciativas promulgadas por las instituciones, hasta aquellas promovidas por el protagonismo colectivo (p.112). Considerando que el concepto de democracia puede abarcar múltiples connotaciones y enfoques, Armando Rendón (2004) destaca como tronco común de las distintas vertientes de democracia participativa, la redistribución del poder en favor de la sociedad (p.187). Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú considera que la democracia participativa “expresa la idea de ampliar los mecanismos de integración del Estado y de acercar la democracia a la sociedad” (ONPE, 2010, p.28).

Vicente Solano (2018) destaca que dialécticamente, se ha avanzado desde una democracia directa clásica a una representativa y está en camino un modelo más complejo, capaz de introducir la complementariedad entre democracia representativa y participativa (p.24). En este sentido, es importante tomar en consideración que el tránsito a un modelo de democracia participativa no supone la separación o eliminación de un modelo representativo. Al respecto, Pachano (2007) destaca la necesidad de superar una perspectiva dicotómica entre las formas participativas y representativas de democracia para comprenderlas como dos términos estrictamente complementarios (p.210). Esta complementariedad está pensada en el fortalecimiento de la democracia pues los sistemas no deben pensarse como alternativos entre sí;

por el contrario, su integración es fundamental para asegurar el acercamiento de la democracia a las personas.

Teniendo en cuenta los cambios en las concepciones de democracia, las propuestas de democracia participativa han supuesto e interpelado por mecanismos de participación que materialicen y promuevan la incidencia política e involucramiento ciudadano en la gestión pública. A partir de esto, los mecanismos de participación se han consolidado como medios prácticos a través de los cuales la ciudadanía se informa, opina, toma decisiones, vigila y evalúa la gestión pública (FARO, 2020, p.8).

En el ámbito ecuatoriano, la Constitución de 2008 reconoce a la participación ciudadana en múltiples normas y principios, consolidándose como eje transversal del ejercicio político. De acuerdo a la Constitución, la participación ciudadana es un derecho y un proceso en permanente construcción del poder ciudadano, que se ejerce a través de los diferentes mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria (CRE, Art. 95). Asimismo, se reconocen todas las formas de organización de la sociedad para desarrollar procesos de autodeterminación en incidencia en decisiones y políticas públicas (CRE, Art. 96). En este sentido, la participación ciudadana de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades es garantizada durante el proceso de formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos (CRE, Art. 85). Por otra parte, dentro de los elementos a destacar de la Constitución de 2008 en materia de participación se encuentra el reconocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), integrado a la Función de Transparencia y Control Social. En este sentido se reconoce al CPCCS la función de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público (CRE, Art. 207). Al respecto, múltiples críticas se han

referido al CPCCS como la institucionalización de la participación ciudadana, lo que a su vez, ha repercutido en su debilitamiento como ejercicio político y ciudadano.

Otro cuerpo normativo de trascendencia en materia de participación ciudadana es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). Dentro de este, destaca como lineamiento para el desarrollo, la participación ciudadana y el control social en la formulación de políticas públicas, reconociendo la diversidad de identidades y los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades (COPFP, Art. 2). Asimismo, se reconoce la planificación participativa en la formulación de planes y políticas (COPFP, Art. 13) y de forma complementaria, se prevé la presencia de participación ciudadana dentro de la formulación y actualización de los planes de ordenamiento territorial de los GADs (COPFP, Art. 46).

Respecto al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) la participación ciudadana y el control social se establecen como función de los GADs de manera integrada con las funciones de legislar y gestionar (COOTAD, Art. 29). Asimismo, para garantizar el derecho a la participación y la democratización de la gestión en los territorios, se reconoce el deber de los GADs de conformar Sistemas de Participación Ciudadana, promover e implementar de manera conjunta con los actores sociales, procedimientos, instrumentos, espacios, mecanismos y otras iniciativas ciudadanas (COOTAD Art.305).

Por otra parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), el Artículo 30 reconoce a todas las formas de organización de la sociedad como manifestación de la soberanía popular. El mismo artículo reconoce la incidencia en decisiones y políticas públicas, así como el control social en todos los niveles de gobierno y en entidades públicas y privadas que presten servicios públicos. De igual forma, se

reconocen en los diversos niveles de planificación espacios de participación como: Asambleas Nacionales y Locales, Consejos Sectoriales, Espacios de Coordinación Intersectorial, Instancias, Sistemas y Consejos de Planificación Local (Arts.48-66). También, se establecen diferentes mecanismos de participación ciudadana y control social como: presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos populares, silla vacía, veedurías, observatorios, entre otros (Arts. 67-84).

A partir de esto, podemos mencionar que la Constitución de 2008 y el desarrollo normativo consecuente, recoge un contenido axiológico y normativo que trasciende de la democracia puramente representativa y construye nuevas relaciones entre el gobierno, la gestión pública y la ciudadanía. En este sentido, mediante un amplio bagaje de principios y normas, la legislación ecuatoriana reconoce variedad de instancias y mecanismos de participación ciudadana que son articulados a todos los niveles de la gestión pública garantizando el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos.

Pese a esto, es de igual relevancia hacer alusión no solo a las críticas de carácter normativo-institucional planteadas en el ámbito nacional, sino también apuntar a aquellos desafíos y lecturas emergentes dentro de las transformaciones tecno-científicas que atravesamos en el siglo XXI.

Por un lado, en el ámbito nacional múltiples aportes han planteado críticas a la institucionalización de la participación ciudadana y carencia de legitimidad del CPCCS. En este sentido, Vicente Solano (2018) destaca que este funcionamiento de la participación ciudadana desde lo estatal la ha puesto en graves peligros, porque es proclive a la cooptación política (p. 150). Mientras tanto, Raúl Borja (2016) considera que se institucionalizó aquel patrimonio político-ciudadano dentro de un ente burocrático y político-partidario, eficiente para la manipulación de un cuerpo de ideas

en su propósito de consolidar el régimen presidencialista reforzado (p.9). Asimismo, Guido Moncayo (2020) considera que definir la participación ciudadana como un quinto poder del Estado, ha resultado hasta el momento un ensayo sociopolítico con más errores que aciertos (p. 130). En consecuencia, uno de los conflictos que ha atravesado a la participación ciudadana ha consistido en la institucionalización y cooptación política, generando su debilitamiento e incluso su deslegitimación.

Dentro del análisis de la participación ciudadana, es de relevancia hacer alusión a la crítica al principio de ciudadanía como requisito para participar y decidir. Autores como Ferrajoli entienden un tratamiento desigual de los seres humanos en distribución de ciertos derechos fundamentales con base, esencialmente, en el lugar de nacimiento y no en la libre elección del individuo de establecerse en un determinado lugar (Jori, 2001, p.131). Bajo esta línea, podemos encontrar limitaciones a la participación y decisión de personas no ciudadanas en temas de interés colectivo.

De igual forma, en el marco de los cambios tecno científicos de las últimas décadas ha sido relevante plantear nuevas lecturas y reconocer desafíos y oportunidades en la participación ciudadana. En este ámbito, se ha evidenciado el potencial de espacios virtuales, principalmente redes sociales, como herramientas de contundente relevancia en el devenir sociopolítico de las sociedades contemporáneas. Desde la primavera árabe en 2010 hasta el escándalo de Cambridge Analytics 2018 dan cuenta de la trascendencia y potencial de los espacios digitales en la opinión, deliberación, capacidad de convocatoria y participación ciudadana y política. En este sentido Herib Caballero (2012) destaca la presencia de cambios sustanciales del funcionamiento del sistema político durante la primera década del siglo XXI. A su consideración, “la mayor parte de esos cambios son producto de la evolución de los medios de comunicación, a través de las innovaciones en las TICs” (p.5). Si bien

dentro de la presente investigación no profundizaremos en lo mencionado, es importante hacer alusión a ciertas lecturas y propuestas complementarias a la línea de investigación.

Durante los últimos años el panorama de la democracia ha sido reformado como consecuencia del avance de las tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Kukovic & Haček (2014) mencionan que la expansión de las TICs, a través de varias herramientas electrónicas, permite que el proceso de participación pública llegue a la audiencia más amplia posible (p.33). Al respecto, importantes experiencias dan cuenta de la trascendencia de los espacios virtuales en la organización, deliberación y participación ciudadana. Startups como Repolitica, Votena Web, Nossas Cidades, entre otras, representan importantes iniciativas que a través de softwares plantean soluciones y alternativas de participación ciudadana e involucramiento ciudadano en la toma de decisiones. De igual forma, en la actualidad no podemos entender el devenir político de las democracias de forma aislada a la opinión, alcance y convocatoria que permiten y facilitan las redes sociales. En este sentido, las TIC han demostrado ser importantes canales de información, comunicación, deliberación y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Rodrigo Corrales (2015) destaca que las redes sociales permiten a la participación ciudadana superar varias de las limitaciones presentes en otros espacios (p.14).

Si bien durante las últimas décadas la participación ciudadana ha sido una categoría ampliamente desarrollada, en la actualidad todavía no es una práctica extendida, comprendida y aplicada por la sociedad en su conjunto. Por esto, es importante tener en cuenta que el reconocimiento constitucional de la participación ciudadana no es suficiente en sí mismo y no significa su cumplimiento sustancial, por lo que, es fundamental la consideración de procesos y actores que permitan su

impulso y materialización. También, es importante ser crítico con las limitaciones a la democracia que se mantienen a partir de una mirada excluyente de ciudadanía y/o aquellas que emergen en medio de contextos tecno-científicos. Como parte de esto, es menester considerar las oportunidades que las TICs ofrecen para la acción política, sin olvidar el componente histórico, político y consecuentemente evolutivo de la participación ciudadana en la democracia.

3.2. Mecanismos Institucionales y No Institucionales de Participación

Para el análisis de la participación ciudadana en el marco de la Consulta Popular por el Agua, es importante abordar la complejidad que la caracteriza y su desbordamiento desde el reconocimiento institucional. Para esto, es importante identificar dentro del presente estudio las manifestaciones de participación ciudadana que quedan fuera de las instancias institucionales y son ejercidas mediante mecanismos institucionalmente no reconocidos pero que representan un importante soporte y fuerza en la incidencia política y participación ciudadana. Para esto, inicialmente serán planteados aportes fundamentales en torno a la institucionalidad y su relación con el Estado. Posterior a esto, se analizará la distinción entre lo “institucional” y lo “no institucional” así como los mecanismos de participación que estos espacios recogen y proponen. Finalmente, serán planteados algunos ejemplos que permitan comprender la complementariedad y tensión en el ejercicio de mecanismos de participación institucional y no institucional.

Dentro de los estudios sobre teoría de la institución, podemos comprender a la institucionalidad como resultado de la construcción de múltiples voluntades con la capacidad de establecer acuerdos, principios y reglas dirigidas a la actuación y regulación de la sociedad. Así mismo, Constantino Urcuyo (2010) define a las instituciones como preceptos socioculturales que surgen del propio conflicto

sociopolítico inherente a la vida social y que sufren el embate del permanente conflicto y del cambio a medio o largo plazo (p.12).

Del Palacio Díaz (2006) define a la institución como un conjunto de relaciones sociales estructuradas en torno a un núcleo de ideas, valores o principios, que objetivan su contenido material y finalidad en el trato diario y dan origen a una organización jerárquica que las dirige, controla o administra (p.40). De igual forma, Douglass North (1990) define las instituciones como las reglas de juego o restricciones creadas por el ser humano para dar forma a su interacción política, social o económica (p.3).

Por otra parte, Julio Isaac Sánchez Villanueva (2013) destaca la comprensión que Casares tiene la institución como pautas de interacción entre individuos las cuales establecen reglas de procedencia para los individuos y configuran estructuras de incentivos, oportunidades y restricciones donde se desenvuelven los agentes (Casares, 2008 citado por Sánchez Villanueva, 2013, p.8).

Dentro de la amplitud de lecturas sobre institucionalidad y tipos de institución, para el presente análisis nos enfocaremos en la institución y el Estado. Partimos de reconocer al Estado como la institución de instituciones sin desconocer la presencia y coexistencia con instituciones de tipo social, religioso, mercantil, etc. Además, se tiene en cuenta que las instituciones se consolidan como el fundamento material del Estado y la base para el funcionamiento y regulación de la vida social. En este sentido, bajo la idea de pacto social, la seguridad jurídica se constituye en un elemento fundamental y justificativo del Estado como institución.

Asimismo, podemos referirnos a la democracia como un sistema de instituciones donde los Estados modernos son estructurados a través de cuerpos normativos que institucionalizan relaciones, regulan el poder, derechos, libertades,

responsabilidades, etc. De esta relación entre Estado e institución, se ejerce con un sentido de administración, dirección y control caracterizada por una organización jerárquica. Para el ejercicio de la gestión, dirección y administración, esta organización jerárquica se conforma con expertos en el trabajo burocrático mismos que atienden pasos, tiempos, formalidades e instancias para regular autorizaciones y restricciones que contribuyen a moldear la conducta de los individuos y grupos (Uvalle, 2007, p. 140).

A partir de lo antes expuesto, dentro del presente trabajo hacemos alusión a la participación ciudadana institucional como aquella cuyas instancias y mecanismos de decisión, deliberación o acción se encuentran regulados y/o administrados por organismos del Estado. Mientras tanto, nos referimos a mecanismos de participación ciudadana no institucional como aquellos cuya manifestación y contenido se justifica y produce en contextos de organización social, popular, iniciativas ciudadanas y/o comunitarias no relacionadas con el Estado.

De igual forma, la distinción entre institucionalidad y no institucionalidad puede ser reconocida a partir de nociones de formalidad e informalidad. En este sentido, el Observatorio Colombiano de Gobernanza por el Agua (2022) destaca la existencia de instancias de participación formal e informal. En el primer caso se encuentran aquellos creados por el Estado para dar cumplimiento a su deber constitucional de garantizar la participación ciudadana. El propósito de estas instancias es formular políticas, planes, programas y/o proyectos. Por otra parte, dentro de las instancias de participación informal se encuentran aquellos mecanismos no regulados por el Estado dentro de los cuales confluyen ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de incidir en las decisiones públicas de su localidad.

En la misma línea, Qori et al. (2015) mencionan que la organización y la acción, en cuanto a las diferentes relaciones con las instituciones del sistema, se pueden dividir en un modelo institucional y no institucional. Como parte de los métodos de acción política dentro de los modelos institucionales se encuentra: la participación en elecciones parlamentarias, referéndum, presupuesto participativo, participación en la gobernabilidad y en general las diversas acciones a través del sistema legal. Por otra parte, los autores reconocen dentro de los métodos de acción de la participación no institucional a las protestas, ocupaciones de edificios de instituciones gubernamentales y espacios públicos, asambleas generales, entre otros.

Además de los mecanismos antes mencionados, es importante tomar en consideración las manifestaciones ciudadanas en espacios físicos y virtuales. Dentro de esto se encuentran expresiones artísticas, de protesta, apropiación y/o manifestación en el espacio público, así como convocatorias ciudadanas, foros, asambleas, participación y opinión en espacios digitales. etc. Esto da cuenta de la diversidad de expresiones ciudadanas para el involucramiento, deliberación y acción en la incidencia de políticas a escala nacional o local.

Por otra parte, es importante considerar la tensión y complementariedad a la que es susceptible la relación entre participación ciudadana institucional y no institucional. Dentro de esto, podemos destacar la Consulta Popular comunitaria realizada por la comunidad Victoria del Portete en el año 2011 donde el 92,38% de la población decidió que no quieren que se realice actividades mineras en el cerro Kimsacocha (El Universo, 2011). Pese a esto, “las autoridades de gobierno y la empresa minera ignoraron esta consulta aduciendo que no contaba con las garantías necesarias al no haber sido organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE)” (Astudillo & Vallejo, 2020, p. 388).

En este sentido, podemos evidenciar la idea de Estado como agente que en uso de facultades califica o desacredita procesos ciudadanos en observancia de un marco normativo y en consecución de la seguridad jurídica que un Estado supone. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que estos procesos paralelos a la institucionalidad no están aislados de un contexto donde las instancias institucionales no solo recogen diversas críticas a su legitimidad sino también han demostrado pasar por alto procesos de consulta imperativos, así como sus resultados, situación que será abordada posteriormente.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el ejercicio de mecanismos de participación institucional, la mayoría de ocasiones, tienen su fundamento en procesos ciudadanos o comunitarios de deliberación y decisión de carácter no institucional. De igual forma, es menester considerar que los mecanismos de participación no institucional se caracterizan por dar paso a expresiones relacionadas a la subjetividad e individualidad. Tradicionalmente, estas quedan fuera de la objetividad, positividad y negación de la individualidad que se manifiesta dentro de los mecanismos institucionales de participación.

Finalmente, la democracia se asienta en condiciones e instituciones previamente establecidas por lo que la participación ciudadana no puede escapar de un marco institucional reconocido, regulado y controlado por el Estado. Sin embargo, la participación ciudadana no se limita a los mecanismos reconocidos institucionalmente. Incluye expresiones y mecanismos no institucionales o “informales” de involucramiento, deliberación u opinión ciudadana que inciden políticamente y son base e impulso para institucionalizar políticas y valores.

A partir de esto, es menester comprender la relación complementaria entre las esferas institucionales y no institucionales de participación ciudadana pues la

participación e involucramiento ciudadano no comienza ni se agota en la trama institucional. Implica expresión, deliberación e incluso resistencia como mecanismos de participación que pueden quedar fuera de aquellos institucionalmente reconocidos y regulados pero que, son trascendentes en el devenir político e institucional.

3.3. Mecanismos e Instancias de Participación en la Legislación Ecuatoriana

Como se ha mencionado previamente, el cuerpo normativo ecuatoriano recoge diversos principios y reglas que transversalizan la participación ciudadana en la gestión pública. El reconocimiento de la participación ciudadana como derecho y principio implica la presencia protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones y control social. Dentro de esto, diversos mecanismos de participación ciudadana contemplados en la legislación ecuatoriana han sido herramienta y camino para el involucramiento e incidencia ciudadana en la gestión nacional y local. Para este análisis, inicialmente se propone un abordaje de las nociones de participación ciudadana para posteriormente referirnos a la distinción con las instancias de participación. Finalmente, haremos alusión a los diversos mecanismos de participación ciudadana reconocidos en el contexto ecuatoriano y sus principales características.

Podemos entender como mecanismos de participación ciudadana a los diversos medios o instrumentos reconocidos por la legislación ecuatoriana y que posibilitan a la ciudadanía tomar parte en la gestión pública. El artículo 72 de la LOPC reconoce a los mecanismos de participación como instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley. Así mismo, Flores de Valgas y col. (2022) destaca que los mecanismos de participación ciudadana son herramientas o medios que impulsan el desarrollo de la ciudadanía en la toma de decisiones, buscan

una participación real y efectiva a la vez que estrechan la relación entre ciudadanía y administración pública (p.6).

Por otra parte, dentro del estudio de la participación ciudadana en el marco de la legislación ecuatoriana, es pertinente marcar una distinción entre mecanismo e instancia de participación. De conformidad con la definición recogida por la RAE, instancia hace ilusión a una institución, organismo o al nivel o grado de la Administración pública o de cualquier institución política o social. Por otra parte, el concepto de mecanismo define a los medios prácticos que se emplean en las artes. A partir de esto, podemos entender como instancia de participación a los espacios o niveles desde donde se ejercen los mecanismos en tanto medios o instrumentos para alcanzar algo, en este caso, la participación ciudadana.

En cuanto a los mecanismos e instancias de participación ciudadana Constitucional y legalmente reconocidos, podemos encontrar los expuestos a continuación. Dentro de los mecanismos constitucionales de democracia directa se encuentra la iniciativa popular normativa, consulta popular y revocatoria del mandato en los artículos 103, 104 y 105 respectivamente, mientras que, el referéndum es incorporado por la LOPC en su artículo 5. Por otra parte, respecto a la participación en los diferentes niveles de gobierno, la Constitución y la LOPC reconoce como instancias de participación a las audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos y observatorios.

En este sentido, las mencionadas figuras se consolidan como instancia en tanto espacio creado para la interlocución entre la sociedad y el Estado. De igual forma, se reconoce a los presupuestos participativos en el artículo 100 de la Constitución y el 64 y 67 de la LOPC. De igual forma, la LOPC incorpora entre las instancias de participación a las asambleas locales y consejos locales de planificación en los

artículos 56 y 66 respectivamente. A continuación, se presentan las principales consideraciones en torno a los mecanismos e instancias antes mencionados.

La iniciativa popular normativa es reconocida en el artículo 61 y 103 de la Constitución y desarrollada entre los artículos 6 y 10 de la LOPC. Aquí, reconoce a los ciudadanos y organizaciones sociales, la facultad de proponer la creación, reforma y derogación de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier órgano con competencia normativa de los distintos niveles de gobierno. Para esto, la iniciativa normativa debe contar con la firma de respaldo de al menos el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente (LOPC, Art.7). Además de este requisito, la iniciativa debe tener: título que identifique al proyecto de ley, exposición de motivos, propuesta normativa adecuadamente redactada, identidad de los miembros de la comisión popular promotora y descripción del proceso de construcción del proyecto de norma presentado (LOPC, Art.8).

Si bien la Consulta Popular será analizada con mayor profundidad, es importante señalar que de conformidad con el artículo 104 de la Constitución, este es un mecanismo de democracia directa que puede ser propuesto por el Presidente de la República, los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la ciudadanía, las iniciativas de consulta no podrán ser relativas a tributos o a la organización político administrativa del país.

En cuanto a la revocatoria del mandato el artículo 105 de la Constitución establece la posibilidad de revocar el mandato de las autoridades de elección popular mediante solicitud respaldada por al menos el diez por ciento (10%) de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente al quince por ciento (15%) para la

revocatoria del Presidente o Presidenta. Dicha solicitud puede ser presentada al cumplirse el primero o antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad.

Respecto a las Asambleas Locales, el artículo 56 de la LOPC las define como espacios con los que cuenta la ciudadanía para la deliberación pública, para fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y de esta forma incidir en la gestión pública. De acuerdo al artículo 57, la composición de las asambleas locales debe garantizar la pluralidad, interculturalidad e inclusión. Entre las funciones de esta instancia, el artículo 60 reconoce: propiciar el debate y deliberación, proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas, promover la organización social, entre otros.

Por otra parte, los Consejos Locales de Planificación son definidos por el artículo 66 de la LOPC como espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo y políticas locales y sectoriales. Estos consejos están integrados por al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía y son designados por las instancias locales de participación en el nivel de gobierno correspondiente.

En cuanto al Presupuesto Participativo, el artículo 67 de la LOPC determina que es el proceso a través del cual la ciudadanía de forma individual o por medio de organizaciones sociales, forma parte de la toma de decisiones de forma conjunta con las autoridades en materia de presupuestos estatales. En este sentido, los presupuestos participativos son un importante instrumento que permite una relación y esfera de acción más próxima entre ciudadanos y el Estado en la construcción colectiva del presupuesto público. Esto ha significado la creación de importantes espacios de deliberación y debate ciudadano a escala local. Como resultado de esto,

se ha evidenciado la construcción de vínculos, acuerdos, aprendizajes en torno a la gestión del barrio y la ciudad.

De conformidad con el artículo 78 de la LOPC, los Cabildos Populares son una instancia de participación cantonal de carácter consultivo con el objetivo de llevar a cabo sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía y discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.

Considerando la naturaleza pública de las sesiones de los GADs, el artículo 101 de la Constitución reconoce a la Silla Vacía como un espacio para incorporar representantes ciudadanos en función de los temas a tratar con el objetivo de que participen en el debate y en la toma de decisiones. En este sentido, la Silla Vacía es un espacio de participación ciudadana que permite a las personas previamente acreditadas, participar con voz y voto dentro de las sesiones de consejos regionales, provinciales o municipales.

Dentro de la veeduría como mecanismo de participación ciudadana, la LOPC reconoce a las veedurías para el control de la gestión pública en el artículo 78 mientras en el artículo 84 reconoce a las veedurías ciudadanas. En ambos casos, se constituyen como modalidades de control social de la gestión pública y asuntos de interés público que afecten a la colectividad.

Respecto a los observatorios, el artículo 79 establece como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con la finalidad de impulsar o monitorear el cumplimiento de las políticas públicas. Su constitución debe estar integrada por personas u organizaciones que no tengan conflicto de intereses con el objeto analizado.

Por otro lado, los Consejos Consultivos son reconocidos en el artículo 80 como mecanismos de asesoramiento integrados por ciudadanos u organizaciones que se

constituyen en espacios y organismos de consulta. Su función es puramente consultiva y podrán ser convocados en cualquier momento por las autoridades o instancias correspondientes.

3.4. Consulta Popular

La consulta popular asienta sus bases en la teoría según la cual la soberanía radica en el pueblo, consolidándose como un importante mecanismo de participación con gran capacidad de injerencia y dirección política. Este mecanismo, tiene sus antecedentes en las constituciones de 1967, 1979 y 1998. Aquí, podemos encontrar importantes elementos que se mantienen hasta la actualidad y cuyo reconocimiento ha dado paso a importantes procesos de deliberación y decisión ciudadana. Debido a esto, a continuación, se presenta una breve revisión de su reconocimiento normativo para posteriormente abordar los aportes del máximo órgano de interpretación constitucional.

Como se mencionó, la Consulta Popular es un mecanismo de democracia directa cuyos precedentes encontramos en las constituciones de 1967, 1979 y 1998. Sin embargo, Ramírez (2015) citando a Pérez (2011) destaca que la primera experiencia de consulta se ubica en junio de 1869 para la aprobación de la “Carta Negra²” (p.41). Al respecto, Ayala Mora (2014) menciona que la razón para sujetar esta constitución a *plebiscito*, fue lo extremista de sus disposiciones, sin embargo, “el electorado la aprobó por una abrumadora mayoría” (p.39).

Respeto a la Constitución de 1967, se reconoce la atribución del Presidente de convocar a Plebiscito en casos de decisiones o proyectos de ley de trascendental

² Constitución de corte conservador e impulsada por García Moreno. Destaca por traer de vuelta la pena de muerte y establecer como requisito para ser ciudadano, ser católico, tener 21 años y saber leer y escribir.

importancia para los intereses de la Nación (CRE, 1967, Art.184.10) Como parte de esto, se reconoce que la decisión plebiscitaria es de carácter inobjetable (CRE, 1967, Art.72). De forma similar, la Constitución de 1979 menciona que la Consulta Popular podrá ser convocada por el Presidente de la República para tratar reformas constitucionales o cuestiones de trascendental importancia. (CRE, 1979, Art.178.p) Pese a esto, se establece que la decisión adoptada no es inobjetable (CRE, 1979, Art.35).

En cuanto a la Constitución de 1998, se reconoce que además del presidente de la república y los organismos del régimen seccional, los ciudadanos en goce de derechos políticos podrán solicitar al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria a consulta popular, excepto para reformas constitucionales (CRE, 1998, Art.105). Dentro de esto, establece como requisito el respaldo del 8% de los empadronados en caso de iniciativas nacionales y el 20% para iniciativas en cualquier circunscripción (CRE, 1998, Arts.105-106).

Por otra parte, la Constitución de 2008 establece que la máxima autoridad electoral (CNE), podrá llamar a consulta popular por iniciativa del presidente, los gobiernos autónomos descentralizados o su máxima autoridad y la ciudadanía. En este último caso, es necesario el respaldo mínimo de 5% del padrón electoral para iniciativas nacionales y 10% para iniciativas locales (CRE, Art.104). Dentro del mismo artículo, se establece que las iniciativas presentadas por los gobiernos autónomos descentralizados deben contar con el respaldo de al menos las tres cuartas partes de sus integrantes. Asimismo, establece como restricción las iniciativas de consulta en asuntos relativos a tributos y a la organización político administrativa del país.

Uno de los elementos fundamentales para la convocatoria a Consulta Popular, consiste en la obligatoriedad de dictamen previo de constitucionalidad por parte de la

Corte Constitucional (CRE, Art.104). Este requisito, tiene como finalidad garantizar la libertad del elector al mismo tiempo que la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a aplicarse mediante la consulta (LOGJCC, Art.127). Como parte de esto, el Art. 105 de la LOGJCC establece veinte días como término para que la Corte resuelva, caso contrario, se entenderá favorable y la omisión será sujeta a las sanciones administrativas correspondientes.

Para una comprensión más amplia de la regulación a la que se sujeta la consulta popular, es importante tener en consideración los pronunciamientos y estándares que la Corte Constitucional ha desarrollado en sentencias No. 002-19-CP/19, 9-19-CP/19, 10-19-CP/20, 6-20-CP/20, 1- 21-CP/21, entre otras.

De acuerdo al Dictamen No. 001-13-DCP-CC, la Consulta Popular es considerada una de las mejores y más eficaces formas de participación en la democracia directa. “Involucra la participación activa de la población en los asuntos políticos de interés común, esto a su vez implica la existencia de normas jurídicas que posibiliten tal participación, así como un alto nivel de conciencia política de la ciudadanía” (p.6). Para el ejercicio de este mecanismo, la Corte consideró fundamental que frente a petitorios dictamen previo de constitucionalidad en el marco de consultas populares, es inexorable que se acompañen los correspondientes considerandos que satisfagan adecuadamente los requisitos normativos reconocidos en el artículo 104 de la LOGJCC (Dictamen No. 2-19-CP/19, párr.18).

Por otra parte, dentro del Dictamen No. 2-19-CP/19 la Corte Constitucional se refirió a la diferencia entre referendo y plebiscito. Señaló que en el referendo se somete a consulta popular la aprobación de un texto normativo -o propuesta normativa- específico, mientras tanto, en el plebiscito se consulta a la ciudadanía

sobre un tema de relevancia pública, sin someter a aprobación un texto normativo determinado (párrafo.29).

De igual forma, mediante Dictamen No. 1-19-CP/19, la Corte señaló que, ante la iniciativa de consultas populares, la Corte Constitucional debe realizar el control constitucional de los considerandos introductorios y las preguntas de la misma, sin necesariamente requerir el respaldo de la recolección de firmas (párr.1.1). En este sentido, establece que en caso que las preguntas estén en concordancia con la Constitución, la Corte notificará su Dictamen al Consejo Nacional Electoral, para que proceda a facilitar los formularios para la recolección de firmas correspondientes (párr.1.2).

Dentro de lo señalado, es importante indicar que el precedente mencionado ut supra, modifica la regla jurisprudencial del Dictamen No. 001-13-DCP-CC. Dentro de este último, se consideró que, para la emisión del dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, era necesario que el CNE remita el informe respecto al cumplimiento de legitimación democrática (párr.3). Sin embargo, posteriormente la Corte mediante Dictamen No. 1-19-CP/19 se alejó del precedente referido “por tratarse de un criterio incompatible con la Constitución, que además de carecer de un sustento jurídico, ha sido empleado como un mecanismo para dificultar y coartar la participación ciudadana” (párr.29).

Como parte fundamental del control de constitucionalidad, la Corte ha insistido en el uso de lenguaje valorativamente neutro³, que garantice la doble exigencia de lealtad y claridad en la pregunta⁴. En este marco, han sido diversas las iniciativas de

³ El artículo 104 de la LOGJCC reconoce entre los requisitos de constitucionalidad, el uso de lenguaje valorativamente neutro, sin carga emotiva, sencillo y comprensible

⁴ El Artículo 103 de la LOGJCC establece que, dentro del control de constitucionalidad, la Corte debe verificar la plena garantía de libertad del elector y, principalmente las cargas de claridad y lealtad.

Consulta Popular que no han recibido dictamen favorable debido al uso de lenguaje con carga emotiva y valorativa, direccionando la respuesta al elector.

Para el análisis del presente caso, es necesario indicar que mediante el Dictamen No. 9-19-CP/19, la Corte estableció que no existe ninguna prohibición constitucional que impida la realización de consultas populares en asuntos relacionados con la actividad minera (párr.21). Por otra parte, en Dictamen No. 1-18-CP/19, la Corte archiva la iniciativa de consulta popular considerando que, de ser favorable el resultado, la voluntad popular sería burlada debido que sus resultados serían jurídicamente inejecutables (párr.13.a) En concordancia con esto, la Corte señala que, para realizar el examen material de constitucionalidad, en caso de plebiscito, es necesario incorporar de medidas a tomar de ser favorable la decisión popular (Dictamen No. 5-20-CP/20, párr.25).

3.5. Participación Ciudadana en la Defensa de Derechos Relativos a la Naturaleza y el Territorio

Durante los últimos años, la importancia, discusión y defensa de derechos relativos al territorio, naturaleza, ambiente sano y otros, ha posicionado luchas y narrativas que interpelan por políticas públicas que atiendan los desafíos y responsabilidades del siglo XXI. Dentro de esto, la organización social y participación ciudadana han demostrado ser fundamentales para alcanzar decisiones judiciales, normativas o políticas públicas que respondan a estas demandas. Como parte de este contexto, se evidencian transformadoras y significativas propuestas a la vez que fuertes tensiones sociales y políticas. A continuación, se realizará una revisión teórica acompañada con ejemplos donde podemos señalar la relación, complementariedad y tensión entre la participación ciudadana y la defensa de derechos relativos a la naturaleza y territorio.

Conforme se revisó en el capítulo anterior, las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del siglo XXI han sido período de importantes cambios a nivel tecno-científico y socio-político. Dentro de esto, la naturaleza y territorio se han ubicado en el foco de debates que reafirman su condición política y demandan acciones de cuidado, respeto y conservación. De forma complementaria, Pacheco (2001) destaca que, a partir de fines de los años 80 y principios de los años 90, la participación ciudadana tomó la relevancia que antes no tenía. A su consideración, en la actualidad el público quiere participar en el diseño de las políticas públicas en materia de medio ambiente, pero también en implantación y evaluación. Como resultado, el autor destaca que la participación ciudadana ha sido reconocida como una condición indispensable dentro de los programas de protección del medio ambiente (p. 26).

Frente a esto, en el contexto ecuatoriano la política minera 2019-2030 ha reafirmado la apuesta al desarrollo económico con políticas públicas que incrementen y diversifiquen la producción del sector minero (Ministerio de Energía y Minas, 2019). Si bien se reconocen ejes y políticas de responsabilidad ambiental, aportes como el de Sánchez Albarrán, (2017) se refieren a la entrada del extractivismo minero junto con diversas formas de despojo y resistencia manifestadas sobre el territorio (p. 19). Además de las consecuencias en términos sociales, se ha señalado la presión sobre diversos ecosistemas estratégicos como las cabeceras de cuencas, la selva amazónica, páramos, lagunas altoandinas, entre otros (OCMAL, 2014 citado en Carvajal, 2016, p. 9).

En este contexto, los derechos sustantivos al territorio y a la libre determinación se han consolidado como eje de reivindicaciones políticas y jurídicas (Gasparello, 2020, p. 137) así mismo, la protección del agua, la tierra y el territorio, el centro de protección de las luchas contra la devastación ambiental, el despojo y mercantilización

de bienes comunes (Carvajal, 2016, p. 45). Dentro de este escenario, ha sido fundamental el ejercicio de mecanismos de participación que interpelen por el reconocimiento y respeto a los Derechos de la Naturaleza a la vez que coadyuven a detener las causas de su vulneración.

A partir de los cambios y luchas ambientales impulsadas por la ciudadanía durante los últimos años, Gudynas destaca el surgimiento de diversas iniciativas que vinculan de forma directa la ciudadanía y el ambiente. De esto, Gudynas destaca el surgimiento de ciudadanías en directa relación con la naturaleza como por ejemplo la “ciudadanía ambiental”, “ciudadanía verde”, “ciudadanía ecológica”, entre otras (Gudynas, 2009, p.60). Si bien estas propuestas tienen gran potencial político y movilizador, es importante considerar que para su fortalecimiento es necesario “potenciar instrumentos y garantías que aseguren la participación, el acceso a la información, y el ejercicio de un control social sobre los recursos naturales” (Gudynas, 2009, p.93).

Conforme se mencionó previamente, la legislación ecuatoriana recoge importantes principios y normas dirigidas a empatar la participación ciudadana con la gestión ambiental. En este sentido, se reconoce como principio ambiental la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución y control de actividades que generen impactos ambientales (CRE, Art.395). De forma consecuente, el artículo 398 de la Constitución menciona que toda decisión o autorización que pueda afectar al ambiente debe ser consultada a la comunidad.

Mientras tanto, la Corte Constitucional se refirió a lo considerado por la CIDH respecto a la participación ciudadana y el acceso a la información pública como elementos necesarios para hacer efectivo el derecho a vivir en un ambiente sano y posibilitar la justicia ambiental. (No. 22-18-IN/21, párr.140). De la misma forma,

importantes obligaciones se desprenden de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Bajo este contexto, podemos destacar la importante profundización del derecho a la participación en materia ambiental, ámbito que será abordado a continuación.

Además de la consulta popular objeto de análisis en el presente estudio, la legislación ecuatoriana reconoce la consulta ambiental, consulta prelegislativa y consulta previa, libre e informada. Estos diversos tipos de consulta coexisten en la legislación ecuatoriana como expresiones específicas del derecho general a ser consultado. Es decir, la Constitución consagra en el artículo 61 numeral 3 el derecho genérico a ser consultado del cual derivan derechos específicos como las consultas antes mencionadas.

En este sentido, la Corte Constitucional señaló que tanto la consulta ambiental (Art. 398 CRE) como la consulta previa, libre e informada (Art. 57.7 CRE) “buscan involucrar a sus titulares en los procesos de toma de decisiones y en las decisiones relativas a proyectos que tengan un impacto en el territorio o en el ambiente” (Sentencia No. 22-18-IN/21, párr.135).

Respecto a la consulta ambiental, la Constitución dispone que debe aplicarse previo a toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente (Art.398). Mientras tanto, la Corte Constitucional consideró que,

En el caso de las autorizaciones y decisiones estatales que puedan afectar al ambiente y estén relacionadas con actividades de minería a mediana y gran escala, la consulta ambiental deberá ser realizada al menos antes de la emisión del registro ambiental y antes de la licencia ambiental (Sentencia No. 1149-19-JP/21, párr.306).

Asimismo, dentro del Dictamen No. 9-19-CP/19, el voto concurrente de las juezas Carmen Corral y Teresa Nuñez destaca que la consulta ambiental “no aparece limitada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, sino a una comunidad en general cuando pudiere producirse una afectación al ambiente” (párr.25). En este sentido, destacan que la consulta ambiental no se constituye como un derecho colectivo sino como un mecanismo de participación y derecho difuso donde son llamados a pronunciarse personas sin un vínculo jurídico pero que se ven amenazados o afectados (párr.25).

En cuanto a la consulta previa libre e informada, la Constitución establece que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho colectivo a ser consultados de forma previa, libre e informada respecto a planes o programas ejecutados en sus tierras y que puedan generar una afectación ambiental o cultural (CRE. Art.57.7). Esto, implica reconocer el control de los recursos naturales y toma de decisiones que poseen los pueblos indígenas, lo que a consideración de Anacona (2014) representa la posibilidad de autogobierno (p.216). Como parte de esto, es importante tener en cuenta que dentro de los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT se establece que: la consulta no se agota con la mera información del proyecto, de igual manera, la consulta debe ser de carácter público e informado, las partes están obligadas a actuar de buena fe, entre otras.

Pese a lo señalado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que:

La Constitución ecuatoriana del año 2008 es una de las más avanzadas del mundo en la materia. Sin embargo, también se ha constatado que los derechos a la consulta previa no han sido suficiente y debidamente regulados mediante

normativa adecuada para su implementación práctica. (CIDH, Caso Sarayaku vs Ecuador, párr.301)

Finalmente, dentro de los derechos colectivos reconocidos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, se establece el derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa (consulta prelegislativa) que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos (CRE. Art.57.17). Como parte de esto, la Corte Constitucional considera que la consulta prelegislativa “constituye un requisito previo sine qua non que condiciona la constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa que pudiera afectar cualquiera de los derechos colectivos” (Sentencia No. 001-10-SIN-CC, p.31).

Además de esto, el artículo 18 del CODA reconoce a los Consejos Ciudadanos Sectoriales y Consejos Consultivos Locales como mecanismos para la deliberación entre la sociedad y los diferentes niveles de gobierno. De conformidad con el mismo artículo, estos consejos deben estar integrados por representantes de la sociedad civil, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por otra parte, los Consejos Ciudadanos Sectoriales están dirigidos al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental mientras que los Consejos Consultivos Locales están dirigidos a la formulación, observación, seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas públicas en materia ambiental de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA), reconoce la corresponsabilidad de consumidores y usuarios en la protección o recuperación y conservación de las fuentes de agua, del manejo de páramos, así como la participación en el uso y administración de las fuentes de agua (Art.12).

Pese al reconocimiento de estos mecanismos, instancias y normativa señalada, Ramiro Ávila Santamaría (2010) destaca que “el derecho, como las garantías jurídicas, no es suficiente. Estas conquistas jurídicas se nutren de las luchas y de los movimientos sociales” (p.24). Debido a esto, comunidades que han sufrido la presión por el control y el dominio de los recursos y ecosistemas, han estimado ejercer diversos mecanismos de participación para defender sus derechos y de la naturaleza. Dentro de esto, se constituyen verdaderos conflictos socio ambientales que en palabras de Wagner (2010) citado por Ramírez (2023) “implican luchas de poder, generalmente asimétricas, en torno a recursos naturales” (p.31).

Como parte de las reacciones comunitarias y ciudadanas, Torres (2018) menciona que la articulación campo-ciudad, ha demostrado tener un peso importante para detener los planes de empresas transnacionales gigantes (p.13). En este sentido, se ha ubicado que las ciudades cumplen un papel fundamental en la discusión y planteamiento de políticas relativas a la defensa de la naturaleza y el territorio. Martínez Lorea (2013) destaca que es importante que el ciudadano no se limite a ser simple espectador o contemplador de lo que lo rodea. Hace referencia al rol de los ciudadanos y el silencio o pasividad ante los problemas que se presentan. Al respecto, marca la diferencia con el rol de consumidor de un espacio que no es pensado como hábitat sino espacio de consumo. De igual forma, como parte de las tensiones presentes, destaca que a esto se añade la problemática de la participación ciudadana como espectáculo, donde los ciudadanos ocupan una posición de observadores o invitados de las autoridades para que su “participación” legitime, encauce o avale determinadas políticas públicas (p.24).

Como se mencionó anteriormente, durante los últimos años se han incrementado iniciativas de participación ciudadana a nivel local y nacional como

resultado de políticas públicas que atentan derechos relativos a la naturaleza y el territorio. En su mayoría, las reacciones ciudadanas han tenido como objetivo detener actividades cuyas consecuencias empiezan a manifestarse, así como incidir y decidir en políticas que prioricen el cuidado de la naturaleza. En consecuencia, podemos destacar que a partir del año 2019 se observa un importante incremento de iniciativas de consulta popular encaminadas a detener actividades nocivas para la naturaleza y el territorio. Entre ellas, se encuentran:

1. Iniciativa presentada en el año 2022 para prohibir la modificación de las categorías de uso de suelo de protección ecológica dentro del casco urbano del Distrito Metropolitano de Quito. (Dictamen No. 2-22-CP/22)
2. Iniciativa de consulta popular presentada en 2019 sobre minería en las parroquias Lita, Carolina, Jijón y Caamaño; y Goaltal de la provincia de Carchi. (Dictamen No. 2-19-CP/19)
3. Iniciativa de consulta popular presentada en el 2021 para la prohibición de minería artesanal, pequeña, mediana y gran escala dentro de los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Guallea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino. (Dictamen No. 7-21-CP y acumulado/22)
4. Iniciativa de consulta popular relativa a la realización de actividad minera metálica en el cantón Ponce Enríquez. (Sentencia: No. 10-19-CP/19)
5. Iniciativa de consulta popular respecto de la prohibición de las actividades mineras en Girón. (Sentencia: No. 1-20-CP/20)
6. Iniciativa de consulta popular a la prohibición de la explotación de minería metálica artesanal en pequeña, mediana y a gran escala, en el Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay/Irquis. (Sentencia: No. 5-20-CP/20)

Bajo este contexto de iniciativas y participación, han destacado luchas y resultados que ponen en evidencia el potencial político y trascendencia de la participación ciudadana. Sin embargo, al mismo tiempo han quedado en evidencia determinadas tensiones e insuficiencias que a continuación serán expuestas.

Por un lado, debemos destacar que importantes victorias referentes a derechos relativos a la naturaleza y el territorio, se asientan en procesos de participación donde lo institucional y no institucional son determinantes. Un ejemplo de esto es el enigmático caso de Sarayaku donde la comunidad, mediante una estrategia multinivel de reclamo, protesta y organización, obtuvo una resolución favorable a la defensa de su territorio y la naturaleza. De igual forma, podemos destacar a la comunidad de Molleturo que, en 2018, mediante solicitud de medidas cautelares acompañada de organización y manifestación social, consiguió la paralización de actividades mineras. De igual forma, podemos destacar la participación ciudadana en el contexto de la Consulta Popular por el Chocó Andino. Dentro de esto, se evidencia el involucramiento de la ciudadanía y de colectivos como “Quito sin minería” a través de marchas, foros y plantones que posicionan la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

Por otra parte, es fundamental tener en consideración las denuncias respecto a los contextos de violencia que atraviesan los defensores de la naturaleza y el territorio. En este sentido, América Latina ha sido considerada la región más letal para los defensores de la tierra tomando en cuenta que, registra más del 70% de crímenes a ambientalistas en el mundo (El País, 2022). En el contexto nacional, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (2021) destaca que “las personas defensoras no cuentan con un entorno seguro para ejercer su labor” (p.2). Además, se refieren a la criminalización, intimidación y hostigamiento a defensores de la naturaleza donde “el Estado ecuatoriano no sólo incumple con sus obligaciones de

protección y garantía de la labor de las y los defensores, sino que realiza y/o participa en varias vulneraciones” (Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, 2021, p.2).

De igual forma, es necesario hacer alusión a las insuficiencias que recoge la institucionalidad en tanto que, ha ignorado procesos consultivos imperativos, sus estándares o resultados. Dentro de esto, comunidades y medios de comunicación han expuesto la vulneración del derecho a la consulta por parte del Estado a la comunidad indígena Sarayaku, en Pastaza, a la nacionalidad Waorani en Napo, Pastaza y Orellana, o a la comunidad de Molleturo en la provincia de Azuay (GK, 2021). Al respecto, se destaca el incumplimiento de estándares referentes a la consulta ya que, en la realidad, el Estado primero concede los territorios y posteriormente realiza los procesos de consulta (GK, 2021). Asimismo, se ha evidenciado irregularidades dentro de estos procesos ya que, las consultas han sido impulsadas por las empresas mineras y pasando por alto los estándares señalados.

Como consecuencia de esto, dentro del caso Sarayaku vs Ecuador, la CIDH consideró la responsabilidad del Estado por haber violado los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural (párr.341.2) y por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal (párr.341.3).

Por otra parte, si bien han incrementado iniciativas ciudadanas y comunitarias para la defensa de derechos, es importante tomar en consideración las limitaciones provenientes de la ciudadanía. Al respecto, Fernanda Ramírez (2023) destaca que en el cantón Cuenca, de siete comunidades objeto de estudio, cuatro de ellas indica no conocer sobre el reconocimiento de derechos a la naturaleza en la Constitución de 2008 (p.37). De igual forma, dentro del análisis de los Informes de Proceso de Participación de proyectos realizados en Cuenca y el Azuay, Kevin Verdugo (2023)

destaca la asistencia ínfima a estos procesos, la falta de opinión y deliberación dentro de los mismos (p.61) por lo que estos informes “sirven únicamente como requisito administrativo, que no presentan una participación significativa” (p.62).

Pese a las deficiencias mencionadas, la participación ciudadana se ha consolidado como un fenómeno en constante crecimiento a nivel local, nacional y regional. Esto, en muchas ocasiones se constituye como reacción al avance de proyectos que ponen en riesgo derechos relativos a la naturaleza y el territorio. En este sentido, durante los últimos años se han evidenciado procesos judiciales, administrativos, de protesta y denuncia ciudadana que tienen como objetivo detener, incidir y decidir sobre políticas públicas. A partir de esto, las propuestas de democracia participativa han impulsado discusiones ambientales donde los ciudadanos asumen su corresponsabilidad como productores y decisores del espacio y las relaciones que este recoge, supone y estimula. Como parte de esto, es menester comprender la articulación y complementariedad entre mecanismos institucionales y no institucionales de participación, así como las relaciones y dependencias entre territorios y sus actores sociales.

CAPÍTULO IV

Consulta Popular por el Agua en Cuenca

4.1. Proyecto de Consulta Popular

Inicialmente, es necesario tener en cuenta que la iniciativa de Consulta Popular está directamente relacionada a una política nacional minera en constante crecimiento. Como se mencionó previamente, durante los últimos años el Poder Ejecutivo ha reafirmado y fortalecido políticas extractivistas a nivel nacional al mismo tiempo que ha puesto en evidencia vulneraciones a derechos fundamentales como el derecho a la consulta.

Si bien la ciudad de Cuenca históricamente ha tenido vocación minera, la concesión de territorios a empresas trasnacionales ha despertado la preocupación ciudadana considerando que, de acuerdo a la iniciativa presentada por el GAD de Cuenca, el 21.77 % del territorio cantonal se encuentra concesionado o en trámites de concesión minera (p.27). Además, Galo Ordoñez (2019) destaca que, el 100% de las concesiones mineras metálicas en las subcuencas de los ríos Yanuncay, Irquis, Tomebamba, Machángara y Tarqui, están en zonas de páramo (p.9) y se ubican aguas arriba de las captaciones para consumo humano (p.16).

Cómo parte de esto, las y los ciudadanos del sector urbano y rural han tenido como principal preocupación el impacto de la minería en fuentes de recarga hídrica. Liliana Brito y Grecia Barrera (2023) señalan que, en siete comunidades analizadas, la totalidad de participantes afirmaron la presencia de conflictos socio-ambientales por el uso de los recursos naturales (p.70). Además, organizaciones sociales y colectivos han denunciado de forma reiterada la vulneración a derechos humanos y de la naturaleza. Al respecto, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (2021) destaca la presencia de casos de asesinato, intimidación y criminalización de activistas en Azuay (p.6).

Como parte de los actores políticos involucrados en esta problemática se encuentran: comunidades directamente afectadas, organizaciones sociales, autoridades, ongs, cámaras de representación, medios de comunicación, entre otros. Estos agentes, han aportado a un proceso de deliberación e incidencia, recogiendo diversos acuerdos y tensiones propios de un conflicto socioambiental.

Por su parte, organizaciones, colectivos y comunidades, han emprendido acciones de denuncia, difusión y organización para defender las fuentes de agua y

territorios de trascendencia ambiental. Estos espacios y manifestaciones no sólo han buscado frenar el avance de proyectos extractivistas, sino también han representado impulso y soporte de discusiones ciudadanas y políticas que demandan el respeto a los Derechos de la Naturaleza, derecho al agua, a vivir en un ambiente sano y otros derechos colectivos.

A partir de esto, desde espacios institucionales y no institucionales, los últimos años se han originado acciones constitucionales, procesos de deliberación, organización y denuncia que ubican en el centro de la lucha, el cuidado por el agua. En este sentido, es importante tener en consideración que la Consulta Popular responde a diversos antecedentes entre los cuales destacan:

Tabla 1
Antecedentes de la Consulta Popular

Antecedente	Fecha	Detalle
Consulta popular comunitaria de Virgen del Portete	2 de octubre de 2011	92,38% de la población dijo NO a las actividades mineras en el cerro Kimsacocha
Parlamento Ciudadano del Azuay (Convocado por el GAD Provincial del Azuay)	17 de diciembre de 2011	Resuelve elaborar la propuesta para discutir la consulta popular provincial sobre la actividad minera.
Parlamento Ciudadano del Azuay (Convocado por el GAD Provincial del Azuay)	11 de febrero de 2012	Resuelve convocar a una movilización en defensa del agua, la vida y los recursos de la Provincia

Pronunciamiento del Consejo Cantonal de Cuenca	Septiembre de 2011	Declara a cuenca territorio libre de minería metálica en
Parlamento Ciudadano del Azuay	11 de febrero de 2012.	Resuelve convocar a una movilización en defensa del agua y en respaldo a las consultas comunitarias organizadas por los pobladores de Molleturo y San Juan de Gualaceo.
Consejo Provincial del Azuay	22 de octubre de 2016	Declara a los páramos como zonas libres de minería metálica.
Acción de protección presentada por la comunidad de Molleturo	5 junio de 2018	Se declara vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Dentro de esto, se ordenó entre otras medidas, la suspensión de las actividades de explotación minera y la desmilitarización de la zona.
Primera Asamblea Ciudadana por la Defensa de los Páramos y el Agua Convocada por el Alcalde de Cuenca y el (CPCCS)	19 en julio del 2018	Resuelve la oposición a concesiones mineras en páramos, humedales, zonas de recarga hídrica, así como rechazar los proyectos mineros en río Blanco y Loma Larga
Consulta Popular en el cantón Girón	24 de marzo del 2019	El 86,79% de la población votó a favor de prohibir actividades mineras en páramos y fuentes de agua

Segunda Asamblea Ciudadana por la defensa del Agua. Convocada por el Alcalde de Cuenca y el (CPCCS)	6 mayo de 2019	Ratifica las decisiones de la primera asamblea y resuelve exigir al GAD municipal y provincial que se convoque a Consulta Popular
Primera solicitud de dictamen de constitucionalidad de convocatoria a consulta popular en la provincia del Azuay	30 de julio de 2019	El 17 de septiembre de 2019 mediante Dictamen No. 9-19-CP/19 es negada la petición de dictamen previo de constitucionalidad al no garantizar la plena libertad del elector
Segunda solicitud de dictamen de constitucionalidad de convocatoria a consulta popular en la provincia del Azuay	7 de Enero de 2020	El 21 de febrero de 2020, mediante Dictamen No. 1-20-CP/20 es negada la petición de dictamen previo de constitucionalidad al no cumplir con los parámetros previstos

Fuente: Elaboración propia

En el marco de estos antecedentes, en 2019 el colectivo Cabildo por el Agua hace un llamado a la ciudadanía para construir una iniciativa de Consulta Popular. David Fajardo (2019) mediante rueda de prensa y en representación del cabildo, convoca a la ciudadanía a “tejer una estrategia” menciona que “necesitamos una construcción colectiva sumamente amplia en la que necesitamos sumarnos los distintos actores, las distintas comunidades y las autoridades que están apoyando este proceso de iniciativa ciudadana” (6m9s).

Si bien la iniciativa se construyó desde la ciudadanía y organizaciones sociales, es importante señalar que, como parte de la estrategia planteada, la misma fue adoptada y presentada a la Corte Constitucional por parte del GAD Municipal. Fajardo

(2022) destaca dos motivos que justificaron esto. Uno, las restricciones que la pandemia supuso y la consecuente dificultad que implicaba la recolección de firmas. Dos, que el proyecto de consulta sea presentado por el GAD implica un antecedente trascendental en el sentido de plantear un proyecto de vida para Cuenca (18m19s).

En consecuencia, la petición de dictamen previo de constitucionalidad fue formalmente presentada por el alcalde de Cuenca el 8 de septiembre de 2020 con fundamento en el acta de sesión del Concejo Cantonal de Cuenca con fecha 1 de septiembre de 2020. Dentro de la iniciativa de consulta popular presentada, se reconoce que, “desde hace aproximadamente dos décadas diversos sectores ciudadanos tanto del área urbana como de la rural del cantón Cuenca, han expresado su preocupación por la expansión de las concesiones mineras hacia zonas de fuentes de agua” (p.2). Menciona que,

Como resultado de manifestaciones sociales contrapuestas en torno a la minería metálica [...] se ha instaurado un debate ciudadano que ya lleva muchos años de controversia y que cada día se agudiza más en la medida en que se aceleran las actividades de minería metálica en las zonas materia del problema. (p.3)

A partir de esto, el Concejo Cantonal indica la necesidad de que la ciudadanía se pronuncie y decida sobre las actividades mineras. En consecuencia, plantea cinco preguntas referidas a la prohibición de explotación minera en zonas de recarga hídrica de cinco ríos del cantón. A mediana escala en el río Norcay y a gran escala en los ríos Tarqui, Tomabamba, Machángara y Yanuncay.

El 18 de septiembre de 2020, mediante Dictamen No. 6-20-CP/20, la Corte se pronuncia favorablemente a la iniciativa de Consulta Popular a la vez que destaca algunas puntualizaciones respecto a la constitucionalidad de ciertos considerados. La Corte, identifica ambigüedad respecto al alcance de la consulta ya que, “no es posible determinar con claridad si aquello surtirá efectos sólo hacia el futuro o si, como parece proponerse en el considerando 67 (determinado como inconstitucional), podría tener un efecto retroactivo” (párr.56). A partir de esto, establece que, en caso de obtener un resultado positivo, sólo podrán tener efectos hacia el futuro (párr.61).

La consulta fue llevada a cabo el domingo 7 de febrero de 2021. Como parte de este proceso, el Cabildo Popular por el Agua con el apoyo de Yasunidos, Sin Etiquetas Cuenca y Pacto Ecosocial del Sur, desarrollaron a través de la red social Facebook la Veeduría Virtual por el Agua. Se conformó de cinco segmentos pensados para el reporte y opinión de voluntarios veedores, líderes y especialistas.

En cuanto a los resultados, la consulta recogió un respaldo popular favorable a la defensa de las fuentes hídricas con los siguientes porcentajes:

Tabla 2
Preguntas de la Consulta Popular

Pregunta	Si	No
¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarquí, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca-Etapa EP?	78,64 %	21,36 %

¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP?	79,95 %	20,05 %
¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Machángara, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP? Sí	80,51 %	19,49 %
¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP?	80,54 %	19,46 %
¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP?	80,54 %	19,46 %

Nota: Realización propia en base a (CNE, 2021)

4.2. Discursos y Disputas

Dentro del presente análisis es fundamental tomar en consideración los discursos, narrativas y disputas manifestadas. A partir de esto, se busca comprender los procesos de organización, así como los escenarios de tensión y deliberación entre los actores y sus intereses. En este sentido, a continuación, recogemos perspectivas, aportes y discursos de los actores involucrados, expuestos en medios de comunicación, espacios institucionales o ciudadanos.

Inicialmente, corresponde abordar de forma breve expresiones y discursos provenientes de los últimos gobiernos apegados al incremento y diversificación de la minería. Como parte de esto, se ha aludido a discursos de minería responsable,

generación de empleo e inversión extranjera. El presidente Rafael Correa dio paso a proyectos mineros a gran escala considerando que, “no podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro” (El Universo, 2013). Posteriormente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner destacó que, “en Ecuador, donde hay minerales habrá minería” (El Universo, 2019). Después, el 5 de agosto de 2021, el presidente Guillermo Lasso expide el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador con la finalidad de generar inversión extranjera e incremento de exportaciones mineras, observando “criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad ambiental y social” (Decreto Ejecutivo No.151, Art.2).

De forma similar, Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables señaló “Cuanta más minería legal impulsemos, lograremos desplazar más y más a la minería ilegal” (El Telégrafo, 2022). Como parte de esto, el discurso del gobierno central durante los últimos años ha consistido en defender la minería con el argumento de erradicar la minería ilegal, así como generar trabajo y beneficios económicos.

Por otra parte, en el ámbito local cámaras de representación como la Cámara de Industrias y Producción y Cámara de Minería del Azuay, han mencionado de forma reiterada una perspectiva de minería responsable, inversión extranjera, generación de empleo y desarrollo para las comunidades. Así, Patricio Vargas (2021) presidente de la Cámara de Minería del Azuay apoya el *No* en la consulta considerando que, la minería:

Es una actividad lícita, necesaria que genera muchos puestos trabajo y genera mucha riqueza, riqueza y dólares que tanto hacen falta en este momento y

empleo que tanto hace falta y ese es el motivo por el que estamos presentes y apoyando el tema del no en la consulta. (1m33s)

El Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en Cuenca (CIPEM), Andrés Robalino (2020), destaca “nuestra posición es siempre respaldar la formalidad, en la formalidad puede darse todo el control posible” (1m03s). Menciona que la discusión se ha transformado más en un tema político que medio ambiental al mismo tiempo señala la presencia de minería ilegal en Río Blanco, situación que a su consideración no se detendrá con una consulta popular. Indica que la empresa minera tiene la obligación de defender y controlar las 5000 hectáreas concesionadas en Río Blanco por lo que frente a la suspensión de las actividades mineras⁵, “esas 5000 hectáreas quedan completamente abiertas y queda a control del gobierno nacional, entonces ¿Qué tan fácil es para el gobierno nacional controlar 5000 hectáreas? ¿Cuánta capacidad de personal se necesita?” (Robalino, 2020, 5m36s).

Asimismo, Vargas (2021) indica que “lo que está auspiciando los políticos con esta consulta es precisamente eso, que las empresas serias y responsables pierdan los proyectos y termine quedando en manos de mineros ilegales irresponsables” (4m14s).

Nosotros queremos generar fuentes de trabajo, queremos generar riqueza para este país, queremos insertar dólares y eso tenemos que valorar, los políticos en cambio, que están en contra de este proyecto, de la posibilidad de hacer minería, no nos dan alternativa, no dan solución como vamos a sustituir los

⁵ Resultado de la Acción de protección y medida cautelar en el proceso No. 01333-2018-03 145

puestos de trabajo que se genera en la minería, como vamos a sustituir la riqueza, los dólares que ingresan. (Vargas, 2021, 6m8s)

Como parte de las narrativas de los sectores productivos, vale mencionar la intervención de Marcelo Guerra Coronel haciendo uso de la Silla Vacía en la sesión del Concejo Cantonal en representación de la Cámara de Minería de Cuenca. En este espacio, Guerra (2020) menciona que la administración y control de los recursos naturales no renovables le corresponde al Estado central y es de interés público nacional por lo que:

El momento en el cual yo genero una participación ciudadana, sólo de manera local o de un grupo de personas, en este caso de nosotros como ciudadanos cuencanos, estaría coartando y estaría vulnerando los derechos de participación de los demás ciudadanos ecuatorianos, en función de que, precisamente el tema de recursos naturales no renovables es de interés nacional. (p.42)

Por otra parte, Guerra menciona que, no pueden realizarse consultas populares que afecten el principio de seguridad jurídica y respeto a los derechos adquiridos por parte de los concesionarios. Destaca el riesgo de responsabilidad internacional por incumplimiento de contrato, así como la posibilidad de repetir estos valores a los funcionarios involucrados (pp. 48-53).

Por otra parte, dentro del discurso de los miembros del Concejo Cantonal cabe señalar su reconocimiento a las organizaciones sociales como promotoras de la consulta. En este sentido Diego Morales (2020) agradece “a todo el trabajo que se ha venido llevando adelante por el cabildo del agua y los colectivos que han contribuido

definitivamente para que el día de hoy se haya podido llegar a conocer en esta sesión” (pp.141-142). De forma similar, Pablo Burbano (2020) destaca que “no somos los dueños de este pronunciamiento, no somos los dueños de la consulta popular, esto se ha recogido y se recoge precisamente desde lo social” (p. 136).

Asimismo, el concejal Alfredo Aguilar (2020) destacó que desde años atrás ha estado presente el discurso en defensa de las fuentes hídricas, menciona que:

Incluso en un momento dado se trató de hacer estudios con la academia, estudios con las universidades prestigiosas de Cuenca y que jamás se tuvo la apertura por parte de algunas empresas concesionadas a esta actividad para que se hagan los estudios y para que se conozca la verdad. (p 131)

Por otra parte, Burbano (2020) menciona que el extractivismo es una situación prioritaria donde la consulta es la oportunidad para pronunciarse sobre una situación muy puntual, pero que resuelve una parte del problema, por lo que hay mucho por hacer (p. 136). De forma similar, el Concejal Xavier Barrera (2020) afirma que “la panacea de la protección de nuestras fuentes de recarga hídrica de ninguna manera es la consulta popular, es parte de un plan integral” (p.134). Finalmente, Iván Granda considera insuficiente el abordaje del tema minero por lo que considera la necesidad de compromisos por una agenda ambiental mucho más amplia y abarcativa (p. 129).

Para referirnos a los discursos y narrativas expresadas por representantes e integrantes de organizaciones sociales, podemos abordar inicialmente la participación en la Silla Vacía de Enrique Serrano, Carlos Castro y Klever Calle dentro de la sesión del Concejo Cantonal para la aprobación de la iniciativa de Consulta Popular. Aquí, Carlos Castro (2020) señala que no existe ninguna contradicción entre el hecho de

que el Estado ecuatoriano tenga la competencia sobre los recursos naturales y el derecho a la participación ciudadana sobre temas que son de interés para la jurisdicción (p. 55). “Que nos vienen a hablar del respeto a la Constitución y a la ley y nos quieren hablar inclusive de problemas económicos y arbitrajes internacionales, cuando efectivamente ninguno de esos contratos respeta lo que dice la Constitución” (Castro, 2020, p.57). Castro destaca una actitud neocolonial por parte del Estado y menciona que:

Se nos quiere imponer a nosotros el destino de ser zona de depredación, en aras de quienes, de recursos minerales, de dineros que en relación a lo que nosotros tenemos que compensar con los pasivos ambientales, ciertamente son designios, cantos de sirenas que nos ofrecen maravillas cuando la experiencia de la muy bien muestra que efectivamente son las élites beneficiarias, grandes empresas transnacionales pero que efectivamente los pueblos se empobrecen, quedan destrozados páramos, sus praderas, bosques y humedales, sus ríos acabados, agotados y esa es la herencia que deja, mientras que efectivamente los bolsillos se enriquecen (p. 153).

Klever Calle (2020) destaca que la consulta responde a un proceso de 20 años entre comunidades campesinas, indígenas, el sector urbano, la empresa ETAPA, entre otros (p.122). Menciona que la iniciativa de consulta se asienta en dos elementos.: “El primer elemento es la defensa del agua, el cuidado de las fuentes hídricas y el segundo elemento es la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro modelo de vida” (p.150). Asimismo, destaca la importancia de la participación comunitaria en defensa del agua señalando que:

La comunidad de Río Blanco especialmente, a partir del año 2017 se levantó ante las evidencias de los primeros impactos que el proyecto minero ya tenía sobre sus fuentes, nos parece que es importante recoger ese proceso comunitario de defensa de las fuentes de agua e integrarlo a esta consulta, para que esta propuesta de consulta sea mucho más integral y no solamente incluye las Cuencas hidrográficas que drenan hacia el atlántico sino que también incluya este caso paradigmático de defensa de los páramos la del río Norcay que drena hacia el pacífico. (Calle, 2020, pp. 124-125)

Sumado a esto, Carlos Castro (2020) indica que la consulta no es un problema de ambientalistas, de ecologistas o de las comunidades indígenas y campesinas, sino que “es un tema que mira a precautelar el agua como un recurso fundamental para la fortaleza productiva para Cuenca y por eso siempre prevenimos que esta era una lucha estratégica para nuestro Cantón” (p. 153). De igual forma, se incorpora a la narrativa de defensa del agua un componente subjetivo representado por Enrique Serrano (2020) con las siguientes palabras:

Las distracciones y los disfrutes que tuvimos aprendiendo a nadar en el río Tomebamba en los hondos debajo del puente del vado cerca de los molinos del batán o yendo a nadar también en el río Tarqui [...] realmente los ríos de Cuenca son la vida. (p.156)

Por otro lado, una vez conocidos los resultados de la Consulta Popular, Alberto Acosta (2021) destaca que la Consulta Popular por el Agua es un triunfo que debe comprenderse en su verdadera dimensión.

Es una lucha que tiene una larga trayectoria, yo rescato todo aquel esfuerzo que venían realizando desde hace por lo menos dos décadas o más, una serie de comunidades campesinas que están enfrentando a la minería para defender los páramos en la provincia del Azuay. (3m31s)

Nidia Solíz (2021) destaca que el proceso de defensa del agua ha sido resultado del accionar de muchos años e indica que el proceso electoral ha representado:

Un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de muchísima gente, de ciudadanos, ciudadanas, de organizaciones no solo locales sino organizaciones, nacionales e internacionales porque la consulta en sí es un paso emblemático en esta lucha de los pueblos y de las comunidades tanto urbanas y rurales para ser quienes decidamos nuestro futuro, nuestro presente, nuestra vida. No puede ser que estemos a merced de la decisión de poderes centrales obviamente con una clara inclinación a las corporaciones transnacionales. (19m58s)

Por otra parte, David Fajardo (2022) menciona que, si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos, este se instrumentaliza como una herramienta que permite materializar los poderes de las grandes transnacionales. En este sentido, destaca que los proyectos mineros no podrían avanzar en Ecuador sin la ayuda del Estado.

En el caso del proyecto de Río Blanco jamás hubiera sucedido si es que el Estado hubiera cumplido sus obligaciones, entre ellas, la consulta previa libre e informada y realizar la consulta ambiental a la población que no se identifica cómo pueblos originarios. (23m45s)

De igual forma, destaca que el alcalde Pedro Palacios es representante de los sectores industriales de Cuenca por lo que, el apoyo a la consulta, “lo hizo entendiendo que hubo compromisos adquiridos durante su campaña que sucedieron por las grandes presiones que se generaron por el movimiento ciudadano que existe en Cuenca respecto a la defensa del agua” (26m38s).

Por otra parte, destaca dentro de la lucha ambiental autorías o protagonismos más o menos peligrosos para la defensa del agua pese a que sus banderas sean la defensa. En este sentido considera que ciertos actores políticos tratan de concentrar la lucha por el agua en sus procesos. Sin embargo, considera que la defensa por el agua es:

Una lucha que no debería tener representación ni debería tener cabeza ni un liderazgo único y específico, sino que es una lucha de los pueblos, es una lucha y reivindicación histórica de los pueblos y por lo tanto es plural, por lo tanto es colectiva por lo tanto no se representa en un liderazgo sino se representa en su mismo proceso. (29m08s)

En cuanto a las tensiones con el sector industrial y minero, considera que estos siguen pensando que, por ser sectores productivos, tienen prevalencia en las decisiones con respecto al territorio y en relación a otros territorios (27m50s).

Seguimos teniendo una ciudad que al fin y al cabo termina siendo administrada por los grandes poderes económicos. La cámara de producción e industria es una cámara que sigue dando órdenes y controlando cómo se organiza territorialmente, productivamente, socialmente, económicamente hasta ambientalmente el cantón Cuenca. (25m10s)

Con respecto a lo señalado por la academia, dentro de la Veeduría Virtual por el Agua, María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, hace referencia a la ciencia ciudadana como espacio donde:

La ciudadanía en general tiene una participación no solamente como proveedora de datos sino realmente como intérprete de los datos y creo que hacia allá tenemos que avanzar como universidad, que toda la ciudadanía pueda ir generando su propio criterio en base a la experiencia científica. (16m52s)

Asimismo, Ana Elisa Astudillo integrante del grupo de investigación Ciudad Patrimonio Mundial VLIR, menciona que universidades y movimientos sociales como Yasunidos, El Cabildo por el Agua, Cuenca Ciudad para Vivir, han aportado en la generación de espacios de diálogo, difusión de la información, campañas, etc. Pese a esto, Astudillo destaca que las iniciativas no tienen el mismo alcance que si fueran abordadas como política pública mediante los canales de la administración (20m14s). A su consideración, esto no solo es falta de voluntad política, ética o compromiso sino llama a pensar en el vínculo de la administración pública y sus compromisos con empresas mineras, cámaras de industrias, producción, entre otros, generando un conflicto de agentes, agendas e intereses involucrados (20m49s).

4.3. Participación Ciudadana, Derecho a la Ciudad y Defensa de la Naturaleza

Con el objetivo de comprender las relaciones entre la ciudad y la defensa de la naturaleza en el marco de la Consulta Popular por el Agua, a continuación, vamos a abordar elementos y aportes que exponen la relación, incidencia y responsabilidad entre ciudad y naturaleza. Como parte de esto, vamos a tomar en consideración

importantes aportes que exponen un escenario de relaciones, tensiones, acuerdos y senderos para la defensa del agua.

Como parte del fundamento y trascendencia de la Consulta Popular, Carlos Castro (2020) destaca que la consulta implica “un hito más en una lucha de más de dos décadas de los ciudadanos del campo y la ciudad, de los habitantes del cantón, de sus instituciones públicas y privadas, de sus organizaciones indígenas, campesinas, urbanas” (28m30s). De forma similar, Alberto Acosta (2021) observa dentro del proceso de consulta, la alianza entre sectores campesinos y sectores de la ciudad. Menciona que “la gente que vive en las urbes se va cada vez más sintonizando con los reclamos que surgieron hace mucho tiempo atrás desde los grupos campesinos e indígenas en todo el país” (3m31s).

Ana Cecilia Salazar (2021) destaca que, el voto mayoritario es una fuerza “respaldada en el compromiso y en la defensa de lo que significa el agua de Cuenca, como este elemento vital de parte de nuestra realidad, de parte de nuestra cotidianidad, de parte de nuestra identidad” (13m25s). En este ámbito, el sentido de cuidado y apego a lagunas, ríos y cauces responde también a la historia e identidad de Cuenca, al valor paisajístico y el rol del turismo durante los últimos años.

De esta forma, se ha manifestado ampliamente el efecto positivo en términos sociales y políticos de la consulta. Por un lado, ha representado una oportunidad más para tomar conciencia del respeto a las fuentes de recarga hídrica a la vez que, ha significado un acto de autodeterminación y exigencia de derechos, que motiva a otras ciudades a seguir el mismo camino.

Por otra parte, la ciudad en sí misma ha sido escenario de plantones, marchas e intervenciones urbanas que dan cuenta de un contexto marcado por preocupaciones ciudadanas materializadas en la ciudad y el territorio. Debemos destacar la intervención y toma del espacio público no sólo como un acto de denuncia sino también como elemento informativo y de incidencia ciudadana que permita comprender las tensiones ambientales que atraviesa el cantón. Al respecto, el siguiente registro fotográfico da luz de procesos de participación ciudadana y conflictos socio espaciales que se materializan en la ciudad como centro político institucional.

Figura 1



Nota: Elaboración propia. 2019

Figura 2



Nota: Elaboración propia 2019

Figura 3



Nota: Tomado de Kikuyo Editorial 2020

Figura 4



Nota: Elaboración propia, 2019

Figura 5



Nota: Tomado de Kikuyo Editorial 2020

A partir de esto, podemos caer en cuenta de un proceso ciudadano de denuncia y resistencia que se toma la ciudad desde una dimensión política e interpela por acciones en defensa a la naturaleza y fuentes de recarga hídrica.

Pese a esto, si bien el resultado electoral implica una victoria ambiental y ciudadana, a consideración de Ana Elisa Astudillo (2022), la participación fue bastante delegativa de la corresponsabilidad. Si bien los cuencanos votaron y están en contra de la minera, no se evidencia un apoyo masivo o expresiones que superen el sufragio (15m10).

En este sentido, Astudillo (2022) llama a una reflexión histórica y crítica pues considera que discutir la defensa de la naturaleza en contextos urbanos implica reflexionar sobre las relaciones que el territorio establece con el campo y la naturaleza. Destaca que la lucha por el agua está atravesada por brechas históricas de segregación y racismo que nos han dividido y que le hacen al otro, al campesino, mucho más vulnerable frente a aquellos que habitan la ciudad (14m09s). Por un lado, indica que nos pensamos lejos de la naturaleza, el campo, la producción agrícola, a la vez que generamos relaciones de cosificación y utilitarismo, donde la ciudad no se corresponsabiliza de la reproducción, cuidado y sostenibilidad de la naturaleza (2m02s). Como consecuencia, menciona que en la ciudad no nos percibimos directamente vulnerados como sucede en las personas en el campo, y no encontramos la urgencia en atender estos temas. Por esto, destaca que al consultarnos, por sentido común defendemos las fuentes hídricas, sin embargo, cuando se trata de organizarnos, de hacer frente, los procesos se disuelven (18m30s).

A partir de esto, Astudillo (2022) considera que pensar a la naturaleza como sujeto de derechos, implica cambiar nuestra percepción como sujetos colectivos en

relación con ella. Como parte de esto, es necesario realizar un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana con lo que sucede en el campo, con su supervivencia y reproducción de la vida. Entender que no estamos alejados de la naturaleza y que la sostenibilidad depende de las diferencias territoriales, diferencias de pensamiento y de relacionalidad con la naturaleza

Por otra parte, David Fajardo (2022) menciona que la lucha por el agua es como un río. Los ríos nacen en las partes altas donde están los páramos, pasan por las zonas rurales y luego ingresan a las zonas urbanas. Esta lucha:

Empezó en los territorios donde estaban las concesiones donde están las comunidades más cercanas, luego se dirigió a las zonas rurales que rodean Cuenca, como Molleturo, Chaucha, Tarqui, Victoria del Portete y luego con el tiempo fue llegando a la ciudad donde organizaciones principalmente identificadas con la lucha ecologista acogieron esta lucha que en principio fue de los pueblos y comunidades originarias y campesinos. (33m20s)

Fajardo (2022) considera que la lucha y la resistencia en contra del extractivismo minero empieza a tener mayor auge en el momento en el que las luchas rurales y campesinas son entendidas por los sectores urbanos y los acogen como sus propias luchas. Destaca que diálogos y relaciones entre la ciudad y el campo, lo urbano y lo rural, han permitido profundizar y fortalecer resistencia en contra del extractivismo (34m50s). A su consideración, el punto de comunión de estos sectores sigue siendo un punto ecosistémico. El punto de convergencia en la defensa de los ecosistemas esta porque “de una u otra forma entendemos que dependemos de esos ecosistemas y que sin esos ecosistemas no hay vida, no hay urbano, no hay rural” (35m12s). Por otro lado, Astudillo destaca que la relación entre la lucha del sector rural

y urbano también parte de reconocer a la ciudad como símbolo y centro del poder a través del municipio, gobierno provincial, etc.

Como parte de la defensa del agua y el territorio, Fajardo (2022) considera necesario construir modelos de organización que superen una perspectiva dicotómica de campo y ciudad para entenderlos a partir de sus relaciones e interdependencia. Como parte de esto, menciona que el Derecho a la Ciudad es fundamental para hacer frente al extractivismo pues el Derecho a la Ciudad debe tomar en consideración la crisis ecológica y climática, debe saber cómo el metabolismo de las mismas ciudades es transgresor y disruptor con los ecosistemas de los cuales dependemos por lo que el Derecho a la Ciudad no debe limitarse a la gestión y administración en términos urbanísticos (58m30s).

En el marco del ejercicio del Derecho a la Ciudad, Astudillo (2022) destaca que es fundamental entender que la ruralidad también habita la ciudad y pensar cómo los campesinos participan de la planificación y diseño de la ciudad (11m21s). Además, indica que la comunidad tiene sus propios procesos de diálogo y participación para llegar a consensos y tomar posición en contra o a favor de la minera, situación que ha alimentado a los colectivos de la ciudad para abrir espacios de participación en sus territorios. Pese a esto, considera que, en el caso de las comunidades rurales, no es tanto participación sino necesidad dentro de un contexto que les obliga a posicionarse políticamente para defender su territorio, sus derechos, sus condiciones básicas de subsistencia como el agua y economía agrícola (25m45s).

De forma similar, Fajardo (2022) destaca la trascendencia de los actos de resistencia de las comunidades más cercanas a los proyectos como un referente. A su consideración, el cierre de las vías de acceso al campamento minero por parte de

la comunidad en 2017, es un acto de participación democrática, legítima, que rompe estructuras, es directo, de autogobierno y determinación (39m20s). A su vez, Astudillo considera como un aprendizaje los procesos participativos in situ de las comunidades pues han logrado posicionar y politizar estas luchas. Desde su criterio, el posicionamiento político, su fuerza e historia se configuran en procesos de participación política paralela a la institución, son procesos constituyentes porque vienen de la base social, de la experiencia y memoria social, en este caso del campo (31m00s). Debido a esto, el conocimiento y trayectoria que reside en los procesos rurales y comunitarios es considerado de gran potencial para resolver las problemáticas que la ciudad ha generado. Nos da la posibilidad de pensar otras formas de participación de compromiso, de corresponsabilidad y espacios de diálogo con proximidad.

La construcción y ejercicio de la Consulta Popular ha sido un proceso que se asienta en la deliberación, toma del espacio público, protestas, talleres, acciones constitucionales originados desde lo urbano y desde lo rural, desde lo institucional y no institucional. Este proceso implica interpelación y crisis por lo que al mismo tiempo nos da la posibilidad de repensar la ciudad y de soñar con una ciudad diferente. A consideración de Astudillo, esto es algo que implica procesos a largo plazo que implica cuestionar las relaciones que hemos establecido, así como la posibilidad de pensarnos diferente como ciudad, en relación a otros agentes y realidades de la cual dependemos (33m00s).

Como se ha indicado, las ciudades cumplen un papel trascendental en la discusión y planteamiento de políticas relativas a la defensa de la naturaleza y el territorio. A partir de esto, se da cuenta de la relación complementaria entre los

territorios no sólo desde una perspectiva ecosistémica sino principalmente política. Las respuestas que la problemática ambiental requiere, no pueden plantearse inobservando las relaciones sociales que los territorios recogen y reproducen. Es decir, la construcción de políticas públicas no debe entenderse lejos de la interdependencia entre los territorios y sus agentes. Para esto, es fundamental construir en la población urbana un sentido de corresponsabilidad directa y pensar el ejercicio del Derecho a la Ciudad como posibilidad de construir un proyecto de vida que reconozca las condiciones biofísicas necesarias para sostenerse.

Conclusiones

La ciudad tiene una dimensión social y política por naturaleza, por lo que, al construir ciudades, nos construimos a nosotros mismos. Sin embargo, la ciudad no solo representa el tipo de relaciones entre ciudadanos, sino también la relación de estos con el territorio y la naturaleza. A partir de esto, la forma en la que construimos y habitamos la ciudad es determinante para favorecer o menoscabar el ejercicio de derechos fundamentales.

Es necesario superar una perspectiva dicotómica entre ciudad y naturaleza para comprenderlas como elementos relacionados con directa influencia del uno sobre el otro. En este sentido, la ciudad debe reconocer su dependencia de la naturaleza no cómo fuente de materias primas sino cómo fuente y sostén de vida. Para esto, se requiere plantear nuevas relaciones urbano ambientales que consideren una perspectiva histórica y decolonial.

La Consulta Popular por el Agua da muestra del sentido político de la ciudad no solo porque bajo este contexto, es posible cuestionar y decidir el tipo de relaciones y actividades que una población permite se realice en su territorio, sino también porque recoge y reproduce procesos de participación y posicionamiento ciudadano de muchos años. Como parte de esto, la Consulta Popular da muestra de que los sectores urbanos tienen lecciones históricas de la lucha rural que politiza y materializa demandas colectivas del presente y del futuro.

De igual forma, la Consulta Popular por el Agua da cuenta de procesos participativos que no son estáticos, sino que se mueven entre lo urbano y rural, lo institucional y no institucional. Esta complementariedad de espacios, ha sido necesaria para procesos de resistencia e incidencia a la luz de políticas mineras que inobservan el derecho de las comunidades a ser consultadas.

Finalmente, se concluye la necesidad de territorializar el Derecho a la Ciudad, llevándolo del discurso al espacio público. Es necesario que la ciudadanía ejerza corresponsabilidad en la construcción de políticas territoriales y ambientales, que conozca sus derechos y se permita imaginar, construir y habitar una ciudad que se reconozca corresponsable e interdependiente con la naturaleza.

Recomendaciones

Generar espacios de aprendizaje, diálogo y reflexión en torno al Derecho a la Ciudad y su interdependencia con los derechos ambientales. Esto, sin limitarse a la comprensión teórica sino perseguir su real ejercicio

Como ciudad, cuestionar y abolir las brechas históricas en torno al territorio, clase y raza que han dificultado empatizar y sentirnos corresponsables con luchas ambientales históricas de la población rural, campesina e indígena.

Superar la perspectiva de la Consulta Popular como un simple proceso consultivo para considerarla con sus antecedentes y dimensión política de autodeterminación ambiental y territorial. A su vez, se considera que, como ciudad, es importante replicar las lecciones de organización social, lucha y resistencia de organizaciones sociales y comunitarias.

Para futuras investigaciones, se recomienda considerar temáticas en torno al cumplimiento de los resultados de la consulta, los procesos de participación en defensa de derechos relativos a la naturaleza y el territorio posteriores a la consulta o, también un análisis del Derecho a la Ciudad en torno al proceso de consulta para la prohibición de minera en el Distrito Metropolitano de Quito.

Referencias bibliográficas

- Acosta, A. [La Voz del Tomebamba]. (7 de febrero de 2021) Cámara de la Minería se pronuncia por el No en la Consulta por el Agua [Archivo de Video]. Facebook. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=414903066489729
- Aguilar. A (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes 1 de septiembre de 2020. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=
- Alessandri, A. F. (1 de agosto de 2005). La utopía de la "Gestión democrática de la ciudad". *Scripta Nova*, IX(194), 01.
- Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. (2021). *Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección*.
- Alvarado Alegría, N. (2016). El Derecho a la Ciudad, como derecho social en el Estado constitucional.
- Alvarado, S., & Pineda Muñoz, J. (2014). El giro ambiental de las Ciencias Sociales. *Nómadas* (41), 13-25.
- Álvarez, V. (2001). *El Golpe detrás de los Ponchos*.

Anaconda, A. (2014). Brechas y exclusión: la consulta previa, un asunto de Derechos Humanos en los pueblos indígenas latinoamericanos. *Políticas Públicas Sociales y Territoriales: reflexiones teóricas y estudios de caso*. Carmen Jimena Holguín.

ARCOM. (2019). Seis ejes articulan la nueva Política Pública Minera del Ecuador para afianzar las inversiones y el combate a la minería ilegal. Agencia de Regulación y Control Minero. <https://www.recursosyenergia.gob.ec/seis-ejes-articulan-la-nueva-politica-publica-minera-del-ecuador-para-afianzar-las-inversiones-y-el-combate-a-la-mineria-ilegal/#:~:text=Se%20articula%20en%20seis%20ejes,las%20actividades%20mineras%2C%20a%20nivel> /

Ascensão, F., Barton, M., Crossman, K., Edgecomb, M., Elmqvist, T., Gonzalez, A., . . . Ziter, C. (2018). *La naturaleza en el siglo urbano Una evaluación global de dónde y cómo conservar la naturaleza para la biodiversidad y el bienestar humano*.

Astudillo, A. E., & Vallejo, C. (2020). La sed de oro nos dejará sin agua: megaminería transnacional de oro en ecosistemas de recarga hídrica (Ecuador). *Relaciones Internacionales*, (47), 385-390.

Ávila Santamaría, R. (2010, octubre 7). *El derecho de la naturaleza: fundamentos*. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1087/1/%c3%81vila-%20CON001-El%20derecho%20de%20la%20naturaleza-s.pdf>

Ávila Santamaría, R. (2012). *Evolución de los derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano*. Obtenido de

<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3015/1/%C3%81vila%2C%20R-CON-008-Evoluci%C3%B3n.pdf>

Ayala Mora, E. (2014). *Historia Constitucional. Estudios comparativos*. Corporación Editora Nacional.

Ayala, T. (2014). Redes sociales, poder y participación ciudadana. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, (26), 23-48.

Banco Mundial. (2021). *Población urbana (% del total) | Data*. Recuperado el 24 de October de 2022, de Banco Mundial - Datos: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS>

Barahona, A., & Añazco, A. (2020). La naturaleza como sujeto de derechos y su interpretación constitucional: interculturalidad y cosmovisión de los pueblos originarios. *Foro Revista de Derecho*(34), 45-60.

Barié, C. (2014). Nuevas narrativas constitucionales en Bolivia y Ecuador: el buen vivir y los Derechos de la Naturaleza. *Latinoamérica*, 9–40. <http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n59/n59a2.pdf>

Barrera. X (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes1 de septiembre de 2020. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=

Bobbio, N. (2001). *El futuro de la Democracia* (III ed.). Fondo de Cultura Económica.

Borja, R. (1971). *Derecho político y Constitucional* (Vol. I).

- Borja, R. (2016). *La Participación Ciudadana en Ecuador*. Ruth Hidalgo, Milagros s Egas y Natalia Salgado
- Borja, J. (2019). Ciudadanía, Derecho a la Ciudad y clases sociales. O la Democracia versus el Derecho. En *Derecho a la Ciudad, una evocación de las Transformaciones urbanas en America Latina* (pp. 25–59). CLACSO.
- Bormann, R., Grassi, S., Bielka, F., & odersen, I. (2016). Prefacio. En *The Social City Programme*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Brito, L., & Barrera, G. (2023). Participación social en la defensa de los Derechos de la Naturaleza en siete comunidades del Azuay. In *Derechos de la Naturaleza. Análisis jurídico y social de los Derechos de la Naturaleza en la Provincia del Azuay. Defensa y garantía de estos*. (pp. 67-77). http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/40760/1/derechos_de_la_naturaleza_final.pdf
- Burbano. P (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes1 de septiembre de 2020. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=
- Caballero, H. (2012). La participación ciudadana en el siglo XXI. *Rev. Int. Investig. Cienc. Soc.*, 8(1), 5-6. <http://scielo.iics.una.py/pdf/riics/v8n1/v8n1a01.pdf>
- Cairo, H. (2013). Espacio y Política: Por una Teoría Política Situada. *Dados*, 56(4), 769-802.

Calbet, N. (2012). Democracia participativa. *Comunicación, Cultura y Política*, 3(2), 107-126.

Calle. K (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes1 de septiembre de 2020.
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=

Cárdenas, K. (2019). *El Derecho a la Ciudad y su relación con la gestión democrática*.

Cardoso, F. (1973). La ciudad y la política.

Carrera Hernández, A. (2019). El Derecho a la Ciudad en la época del urbanismo neoliberal. *Tareas* (161), 5-14.

Carrión, F., & Dammert, M. (2019). El Derecho a la Ciudad: una aproximación. En *Derecho a la Ciudad: una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina* (págs. 9-21). CLACSO.

Caruso, S. (2018). Crisis ambiental, pensamiento ambientalista y creación de áreas naturales protegidas en argentina. *Breves Contribuciones del I.E.G*, 29, 74-102.

Carvajal, L. M. (2016). Extractivismo en América Latina. Impacto en la vida de mujeres y propuestas de defensa del territorio. FAU.

Castillo Sarmiento, A., Suárez Gélvez, J., & Jemay. (2017). *Luna Azul* (44), 348-371.

Castro. C (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes1 de septiembre de 2020.
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=

GE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMD
M4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=

Castro, C. [Pacto Ecosocial del Sur]. (3 de diciembre de 2020) Ruta por la Consulta Popular en Cuenca [Archivo de Video]. Facebook.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=695428761404804

CEPAL. (2012). La urbanización presenta oportunidades y desafíos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Notas de la Cepal.
<https://www.cepal.org/notas/73/Titulares2>

CGLU. (2019). Derecho a la Ciudad #CitiesAreListening Eje del Cabildo Público.
https://www.durban2019.uclg.org/sites/default/files/2019-11/ES_Righ%20to%20the%20City_PolicyPaper.pdf

Corrales, R. (2015). *Impacto de las redes sociales sobre la participación ciudadana en procesos electorales y la democracia: caso de Costa Rica*.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redessociales.pdf

Correa Montoya, L. (2010). ¿Qué significa tener Derecho a la Ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos. *Territorios* (22), 125-149.

Cruz Cabrera, M. (2016). El desafío de hacer ciudad en el siglo XXI. *Revista EÍDOS* (9).

Cuervo González, L. M. (2017). *Ciudad y territorio en América Latina Bases para una teoría multicéntrica, heterodoxa y pluralista*.

Del Palacio Díaz, A. (2006). Institucionalidad y administración. *Casa del Tiempo*, VIII (90).

Dietz, K. (2018). Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa. *Colombia Internacional*, 93, 93–117. <https://doi.org/10.7440/colombiaint93.2018.04>

Dussel, E. (2007). *Política de la liberación. Historia mundial y crítica*.

El País. (2022, junio 18). *Un continente mortal para los defensores de la tierra*. El País. <https://elpais.com/internacional/2022-06-19/un-continente-mortal-para-los-defensores-de-la-tierra.html?outputType=amp>

El Universo. (2011, October 3). *La consulta en la comuna de Azuay se inclinó con un 92,38% contra la minería*. El Universo. Retrieved January 7, 2023, from <https://www.eluniverso.com/2011/10/03/1/1447/sin-aval-oficial-comuna-azuay-fue-urnas-decidio-sobre-mineria.html/>

Endara, G. (2016). *Hábitats justos, diversos y sustentables*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador.

Ferrero, J. J. (2013). The International Convention for the Protection of Birds (1902). *Ardeola*, 60(2), 385-396.

Fajardo, D. [Cabildo Popular por el Agua]. (23 de julio de 2019) Rueda de Prensa en DEFENSA del agua. Frente a los negativos resultados obtenidos en la Sesión del Concejo Provincial el 22 de julio de 2019 [Archivo de Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/watch/?v=2062691894038830>

Flores de Valgas, S., Anchundia Mielles, M. B., Observatorio Ciudadano de Manabí. (2022). *Ejercicio pleno de los mecanismos de participación ciudadana*.

Foro Social Mundial. (2005). Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Revista paz y conflictos, 184–196.
https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf

Fortunato, N. (2005). El territorio y sus representaciones como recurso turístico. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 14(4), 314-343. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1807/180713885002.pdf>

Galarza, M. (2018). *Legislación Ambiental del Ecuador*.

Galeano, E. (1971). *Las venas abiertas de América Latina*.

Garnier, J.-P. (2012). El Derecho a la Ciudad desde Henri Lefebvre hasta David Harvey. Entre teorización y realización. *ciudades* (15), 217-225.

Gasparello, G. (2020). Megaproyectos a consulta: ¿derechos o simulaciones? Experiencias en México. *LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos*, 18(2), 124–141. <https://doi.org/10.29043/liminar.v18i2.762>

Gehl, J. (2014). *Ciudades para la gente*.

Guaynas, E. (2015). Los Derechos de la Naturaleza. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=hXTTYCk4zHY>

Gudynas, E. (2009). Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas. *Urgencia y utopía a la crisis de la civilización*.

Guerra. M (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes 1 de septiembre de 2020. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2Nhc nBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=

- Guzmán Álvarez, J. R. (2010). Relaciones entre el mundo rural y urbano. El campo, la naturaleza y el paisaje ante la ciudad del siglo XXI. *Revista Cuatrimestral de Geografía*, 170-180.
- GK. (2021, November 11). *¿Qué es la consulta previa, libre e informada?* Gk.City. Retrieved January 11, 2023, from <https://gk.city/2021/11/11/consulta-previa-libre-informada-ecuador/>
- Harvey, D. (1996). *Justice, Nature & the Geography of Difference*. Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
- Harvey, D. (2008). The Right to the City. *New left review*, 23–39.
- Hernández, A. A. R., Kanno, P. H., & Souza Filho, C. F. M. D. (2020). La noción socioambiental Del Derecho a la Ciudad. *Revista Direito e Práxis*, 11(1), 440–469. <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2020/48216>
- Hincapié, S. (2017). Extractivismo, consultas populares y derechos políticos ¿El renacimiento de la democracia local en Colombia? *Reflexión Política*, 19, 86–99. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11052397007>
- Jori, M. (2001). Ferrajoli sobre los Derechos. In *Los fundamentos de los derechos fundamentales* (pp. 105-137). Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello.
- Khadzali, N., & Zan, Z. (2018). E-participation: A systematic understanding on public participation in the government in the 21st century. *Jurnal Intelek*, 13, 29-46.
- Lefebvre, H. (1968). *Derecho a la Ciudad*.
- Lefebvre, H. (1972). *Espacio y Política*.

- Maluf, F., Calaça, I., Freitas, P., & Augusto, S. (2017). La naturaleza como sujeto de derechos: análisis bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia. *Revista Latinoamericana de Bioética*, 18(34–1), 155–171. <https://doi.org/10.18359/rlbi.3030>
- Martínez, E., & Acosta, A. (2017). Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible. *Direito & Práxis*, 2927-2961.
- Martínez Lorea, I. (2013). Prólogo: Henri Lefebvre y los espacios de lo posible. In *La producción del espacio* (pp. 9-28). Capitán Swing Libros, S. L.
- Martínez-Moscoso, A., Bermeo Cabrera, F., & Salazar, A. C. (2019). El ejercicio del Derecho a la Ciudad en el Ecuador. Análisis normativo y práctico sobre su aplicación y restricciones en el Municipio de Cuenca. . . *Iuris Dictio*, 71–84. <https://doi.org/10.18272/iu.v23i23.1433>
- Minnaert, A., Rincón, O., & Denzin, C. (2016). *Hábitats justos, diversos y sustentables*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS)Ecuador.
- Molano, F. (2016). El Derecho a la Ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la ciudad capitalista. *Revista Folios*, 3–19.
- Moncayo, G. A. (2020). Participación ciudadana y politización institucional: veinte años de un dicotómico quinto poder en Ecuador. *Estado & comunas, revista de políticas y problemas públicos*, 2(11), 119-134.
- Montaña Pinto, J. (2011). Introducción. En *Apuntes de Derecho Procesal Constitucional: Vol. I* (pp. 9–17). Corte Constitucional para el periodo de Transición.

- Montaña Pinto, J., & Pazmiño Freire, P. (2011). Algunas consideraciones acerca del nuevo modelo constitucional ecuatoriano. En *Apuntes de derecho procesal constitucional*: Vol. I (pp. 21–43). Corte Constitucional para el Periodo de Transición.
- Morales. D (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes 1 de septiembre de 2020. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=
- Muñoz, E. E., & Villamar, M. C. (2019). Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y Caribe: luchas sociales contra el extractivismo. *Relaciones Internacionales*, 141–163.
- Navarrete, L. (2014). Las políticas de sustentabilidad en el contexto de la globalización. En *Políticas Públicas Sociales y Territoriales: reflexiones teóricas y estudios de caso*. Carmen Jimena Holguín.
- Noah Harari, Y. (2014). *De animales a dioses*. Penguin Random House.
- North, D. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza. (2022). Vademécum jurídico sobre los Derechos de la Naturaleza. Obtenido de <https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2022/05/VADEME%CC%81CUM-JURI%CC%81DICO-SOBRE-LOS-DERECHOS-DE-LA-NATURALEZA.pdf>

- Observatorio Colombiano de Gobernanza por el Agua. (2022). *Instancias de Participación*. IDEAM. Retrieved January 3, 2023, from <http://www.ideam.gov.co/web/ocga/instancias-de-participacion>
- OCGA. (2022). *Instancias de Participación*. IDEAM. <http://www.ideam.gov.co/web/ocga/instancias-de-participacion>
- ONPE. (2010). *Institucionalidad democrática y cultura electoral en los procesos electorales de las organizaciones sociales*.
- Ordoñez, G. (2019). *Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca*.
- Pachano, S. (2007). *La trama de Penélope Procesos políticos e instituciones en el Ecuador*. FLACSO. http://www.simonpachano.com/uploads/2/1/4/3/21439124/01._la_trama_de_penelope.pdf
- Pacheco Vega, R. (2001). Dos modalidades de participación ciudadana en política ambiental. *Economía, Sociedad y Territorio*, 3(9), 25-61.
- Palero, J. S. (2016). El Derecho a la Ciudad según Henri Lefebvre. Del libro al movimiento. *Vivienda & Ciudad*, 3, 85-92.
- Paoli Bolio, F. (2010). Crisis de la Democracia Representativa. *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, (25), 161-173. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222977009>
- Parra, D. (2017). Dilema de la actividad minera y el Buen Vivir, Sumak Kawsay en la Constitución de Ecuador ¿Existe inconstitucionalidad de fondo en la Ley de Minería? *IURIS*, 2(16), 115-150.

- Peñafiel, M., Peralta, C., & Salazar, X. (2019). Lectura espacial del Derecho a la Ciudad. El caso de Cuenca-Ecuador. *Bitacora Urbano Territorial*, 30(1), 61-74.
- Pérez, C. (2011). La preocupación legal por el medio ambiente. *Páginas de Información Ambiental*(36), 24-29. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3723230.pdf>
- Pérez Vaquero, C. (2011). La preocupación legal por el medio ambiente. *Páginas de Información Ambiental*, (36), 24-36. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3723230.pdf>
- Pinto, I. Z., Carneiro de Freitas, P., da Silva, S. A., & Maluf, F. (2018). La naturaleza como sujeto de derechos: análisis bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia. *Revista Latinoamericana de Bioética*, 18(1), 155-171. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/1270/127054340009/html/>
- Qori, A., Kirn, G., Kurepa, T., Hanza, A., Ivšić, I., & Kunac, S. (2015). *Between institutional and non-institutional forms of democratic organizing: Towards revolutionary change*. LeftEast. <https://lefteast.org/between-institutional-and-non-institutional-forms-of-democratic-organizing-towards-revolutionary-change/>
- Rabasa Gamboa, E. (2020). La democracia participativa, respuesta a la crisis de la democracia representativa Cuestiones constitucionales. *Cuestiones constitucionales*, (43), 351-376.
- Ramírez, R. (2015). *La Consulta Popular convocada desde la ciudadanía en el Ecuador*. Universidad de Cuenca.

- Ramírez, F. (2023). Derechos de la Naturaleza o Pachamama: conflictos socioambientales; un análisis jurídico y social en siete comunidades del Azuay. En *Derechos de la Naturaleza. Análisis jurídico y social de los Derechos de la Naturaleza en la Provincia del Azuay. Defensa y garantía de estos*. (pp. 30-41). http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/40760/1/derechos_de_la_naturaleza_final.pdf
- Ramón, J. (2010). Relaciones entre el mundo rural y urbano. El campo, la naturaleza y el paisaje ante la ciudad del siglo XXI. *ERÍA*, 170-179.
- Rayner, J. (2022). Autonomía, centralidad y persistencia: comunas, movimiento indígena y el Derecho a la Ciudad en Quito. *mundos plurales*, 9(1), 27-56.
- Roncal Vattuone, X. (2013). La naturaleza...un sujeto con derechos. *Revista Integra Educativa*, 6(3), 121-136.
- Robalino, A. [La Voz del Tomebamba]. (28 de enero de 2020) [ENTREVISTA EN VIVO] Andrés Robalino, Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, CIPEM, aborda el tema minero en nuestros estudios [Archivo de Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/rtomebamba/videos/885521211906256/>
- Salazar, A. [Cabildo Popular por el Agua de Cuenca]. (7 de febrero de 2021) Veeduría Virtual por el Agua [Archivo de Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/100061229731360/videos/867998720630533>
- Sánchez Albarrán, A. (2017). Territorio, extractivismo y (des)ciudadanía en América Latina. *El Cotidiano*, 17–26.

Sánchez Villanueva, J. I. (2013). *Teoría institucional y ciencia política como factores de cambio en la seguridad nacional y gobernanza democrática* [XXVI Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública]. Caracas.

Serrano, E (2020, septiembre 1). Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Cuenca celebrada el martes 1 de septiembre de 2020. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic3MTliNGE5Mi1kNjBjLTRjYjAtOTg0Ny0zMDM4MDY4ZmU1MGEucGRmJ30=

Solano, V. (2018). *Democracia participativa y meritocracia. ¿Entre la división de poderes y la participación ciudadana?* Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7254/1/Solano%20V-Democracia%20participativa.pdf>

Soliz, N. [Cabildo Popular por el Agua de Cuenca]. (7 de febrero de 2021) Veeduría Virtual por el Agua [Archivo de Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/100061229731360/videos/267215851524132>

Straehle, E. (2018). Mayo del 68, la Comuna de París y la tradición revolucionaria: Una aproximación desde Henri Lefebvre. *Oxímora revista internacional de ética y política*, 13, 219-238. Obtenido de <https://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/22132/23897>

Sudjic, D. (2017). *El lenguaje de las ciudades*.

- Torres, N. (2018). El nuevo “consenso minero” en Ecuador: Discursos y prácticas contradictorias El caso del Macizo del Cajas. Friedrich Ebert Stiftung. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/14910.pdf>
- Tórtora, H. (2021). El “Buen Vivir” y los derechos culturales de naturaleza colectiva en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano Descolonizador. *Revista de derecho (Coquimbo)*, 28. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-97532021000100213&script=sci_arttext
- Vargas, P. [La Voz del Tomebamba]. (19 de enero de 2021) Cámara de la Minería se pronuncia por el No en la Consulta por el Agua [Archivo de Video]. Facebook. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=414903066489729
- Verdugo, K. (2023). La naturaleza, el ciudadano y los derechos de participación: cuando los derechos no salen del papel. In *Derechos de la Naturaleza. Análisis jurídico y social de los Derechos de la Naturaleza en la Provincia del Azuay. Defensa y garantía de estos.* (pp. 57-64). http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/40760/1/derechos_de_la_naturaleza_final.pdf
- Urcuyo, C. (2010). *Reflexiones sobre institucionalidad y Gobernabilidad Democrática. Unavisión desde el contexto centroamericano.* FLACSO. [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4318FD3DD518FA300525805A0074B3BE/\\$FILE/Reflexiones_sobre_Institucionalidad_y_Gobernabilidad.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4318FD3DD518FA300525805A0074B3BE/$FILE/Reflexiones_sobre_Institucionalidad_y_Gobernabilidad.pdf)

Uvalle, R. (2007). Institucionalidad, eficacia y desafíos de la democracia. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (38), 135-162.
<https://www.redalyc.org/pdf/3575/357535523006.pdf>

Referencias Normativas

Constitución de la Ciudad de México. (2017)

Constitución de la República del Ecuador. (1967).

Constitución de la República del Ecuador. (1979).

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

Código Orgánico del Ambiente [CODA]. Registro Oficial No. 983. 12 de abril de 2017 (Ecuador).

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas [COPFP] Registro Oficial No. 306. 22 de octubre de 2010 (Ecuador).

Código Orgánico de Organización Territorial [COOTAD]. Registro Oficial No. 303. 19 de octubre de 2010 (Ecuador).

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [LOGJCC] Registro Oficial No. 52. 22 de octubre de 2009 (Ecuador).

Ley Orgánica de Participación Ciudadana [LOPC]. Registro Oficial No. 175. 20 de abril de 2010 (Ecuador).

Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovisionamiento del Agua [LORHUyA] Registro Oficial No. 305. 06 de agosto de 2014 (Ecuador).

Decreto Ejecutivo No.151 (Presidente Constitucional de la República de Ecuador 5 de agosto de 2021)

Jurisprudencia

Dictamen No. 001-13-DCP-CC (2013, 25 de septiembre) Corte Constitucional del Ecuador

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J2FsZnJlc2NvJywgZXVpZDonMGZhMGRiNDktMDI3ZC00ZGY4LWlzM2UtMTFmZDc2YTE2MjAxLnBkZid9 =

Dictamen No. 1-19-CP/19 (2019, 16 de abril) Corte Constitucional del Ecuador (Dra.

Carmen Corral Ponce, M.P.)

<http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f39f6997-a04b-4955-8d73-2f6b31aa9cda/0001-19-cp-dic.pdf?guest=true>

Dictamen No. 2-19-CP/19 (2019, 20 de junio) Corte Constitucional del Ecuador (Dr.

Agustín Grijalva Jiménez, M.P.)

<https://portal.corteconstitucional.gob.ec/seguimiento/2-19-CP-19.pdf>

Dictamen No. 9-19-CP/19 (2019, 17 de septiembre) Corte Constitucional del Ecuador

(Dr. Agustín Grijalva Jiménez, M.P.)

<http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3ace9ac3-28f9-4bc4-99e0-05a00073cc78/0009-19-cp-dictamenyvotoconcurrente.pdf?guest=true>

Dictamen No. 1-18-CP/19 (2019, 02 de octubre) Corte Constitucional del Ecuador (Dr.

Ramiro Ávila Santamaría)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlD

GE6J2FsZnJlc2NvJywg dXVpZDonMGZhMGRiNDktMDI3ZC00ZGY4LWl zN2U
tMTFmZDc2YTE2MjAxLnBkZid9 =

Dictamen No. 5-20-CP/20 (2020, 26 de agosto) Corte Constitucional del Ecuador (Dra.

Alí Lozada Prado)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2Nhc nBld

GE6J3RyYW1pdGUhLCB1dWlkOiczZWFjN2YwYS01ZjYzLTQ2YTMtOTk0NS

1jYTg3MDk4ZjQxZTEucGRmJ30=

Dictamen No. 6-20-CP/20 (2020, 18 de septiembre) Corte Constitucional del Ecuador

(Dra. Karla Andrade Quevedo, M.P.)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2Nhc nBld

GE6J3RyYW1pdGUhLCB1dWlkOicxM2lwMGYyMS1iMGUwLTQwZDgtOWU

wOS0yNWlyZjNjMzBhNTMucGRmJ30=

Dictamen No. 2-22-CP/22 (2022, 21 de septiembre) Corte Constitucional del Ecuador

(Dr. Enrique Herrería Bonnet, M.P.)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2Nhc nBld

GE6J3RyYW1pdGUhLCB1dWlkOic1ZmUzZTQ4YS0wMTVILTQxMzUtYjAzN

C1hN2I3YjQ0NzhhNDkucGRmJ30=

Sentencia No. 001-10-SIN-CC. (2010, 18 de marzo). Corte Constitucional (Dr. Patricio

Pazmiño Freire, M.P.)

<http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStor>

e/d1f5a8d7-429a-425a-87b0-06daadcc33a0/0008-09-IN-res.pdf

Sentencia No. 22-18-IN-21. (2021, 08 de septiembre). Corte Constitucional (Dr.

Ramiro Ávila Santamaría M. P.).

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2Nhc nBld

GE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidiN2NkMjRmMS1hODMxLTQxMTEtODEzZ
i1iZTQyOWQ0ZjQxYTMucGRmJ30=

Sentencia No. 1149-19-JP/21. (2021, 10 de noviembre). Corte Constitucional (Dr.

Agustín Grijalva Jiménez, M.P.)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBld

GE6

J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2MmE3MmlxNy1hMzE4LTQyZmMtYjJkOS1m

YzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=

Sentencia No. 1185-20-JP/21 (2021, 15 de diciembre) Corte Constitucional del

Ecuador (Dr. Ramiro Ávila Santamaría)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBld

GE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidIMGJiN2I1NC04NjM5LTQ1ZmItYjc4OS0y

NTFINTFhZWl2YTEucGRmJ30=

Sentencia No. 2167-21-EP/22 (2022, 19 de enero) Corte Constitucional del Ecuador

(Dr. Ramiro Ávila Santamaría)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBld

GE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic5OWVmN2EyZC1kM2I5LTQwOWQ0OWY

4ZS1jMDc3YzYxYWQ2ZGMucGRmJ30=

Sentencia No. 253-20-JH/22 (2022, 27 de enero) Corte Constitucional del Ecuador

(Dra. Teresa Nuques Martínez)

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBld

GE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3ZmMxMjVmMi1iMzZkLTRkZDQtYTM2N

C1kOGNiMWlwYWViMWMucGRmJ30=